

103ª REUNION — Continuación de la 5ª SESION EXTRAORDINARIA — DICIEMBRE 3 DE 1964

Presidencia del señor diputado Arturo Mor Roig

Secretarios: doctores Eduardo T. Oliver y Guillermo González

Prosecretarios: doctor Enrique A. Pardo y señor Sebastián Oreste Cánepa

DIPUTADOS PRESENTES:

ABALO, Raúl
ACHIARY, Juan C.
AGUIRRE CÁMARA, José
ALFONSIN, Raúl R.
ALMADA, Jorge Mariano
AMURA, Luis
ARANA, Tomás P.
ARIAS, Luis Osvaldo
ARRASCAETA, Félix de
ARROYO, Ramón F.
ÁVILA, Eduardo Miguel
BACCAY, Rodolfo D.
BACHINI, José A.
BAFFICO, Alejandro O.
BALBI, Isidro G.
BALBOA, Hernán A.
BALESTRA (h.), Juan
BELGRANO RAWSON, Guillermo A.
BELNICOFF, Manuel
BERHONGARAY, Pedro J.
BERINI, Carlos J.
BERRINI, Emilio
BILBAO, Saturnino
BO, Angel
BOBILLO, Luis Ignacio
BOGLIANO, Palmiro B.
BRAVO, Carlos A.
BRAVO, Héctor F.
BUSACCA, Salvador F.
BACESES, Roberto M.
BAGGIANO, Angel E.
BALABESE, Pablo
BALVÓ, Carlos Alberto
BANTONI, Angel Serafin
BARDENAS, Juan Carlos
BEO, José Armando
BEREIRA, Emilio
BASAS, David Jorge
BASTELLAR, Miguel A.
BETALÁN, Guillermo
BENTENO, José Isaac
BELLLO, Clemente Juan
BENDOLUCI, Domingo A.
BENTINI, Juan Carlos
BETAL, Juan Carlos
BETEZZI, Osvaldo
BENTINO, Adolfo I.
BETLE, Francisco E.
BETE, Jorge J.
BETANI, Salvador
BETARA, José Eduardo
BETO, Miguel P.

DI LEO, Amadeo
DOMINGORENA, Horacio O.
DOMINGUEZ, Luis C.
ELENA, Reinaldo
FABRIZIO, Luis N.
FERNANDEZ, José M.
FERNANDEZ, Raúl
FERNÁNDEZ MENDY, Julio O.
FERNANDEZ NÚÑEZ, Isidro
FERREIRA, Jorge W.
FIGUEROA, Jaime Hernán
FIOL, Juan Antonio
FISCHER, Mauricio
FRAGA, Jorge Horacio
FREGA, José
GALEANO, Roberto A.
GARAY, Fermín J.
GARCIA, Horacio
GARCIA LEYENDA, F. Rodolfo
GARIBALDI, Alberto
GAROFALO, Roberto A.
GHIOLDI, Américo
GODOY, Ruperto Honorio
GÓMEZ MACHADO, Héctor
GONZALEZ BERGEZ, Pablo
GRAU, Mario A.
GUALCO, Jorge Nelson
GUTIÉRREZ, Eduardo O.
HARRINGTON, Luis J. D.
HERRERA, Oscar A.
IGLESIAS, Israel
JOFRE, Emilio
LEJARRAGA, Pablo
LEÓN, Luis Agustín
LESCANO, Edmundo A.
LILJESTHROM, Eduardo R.
LOZANO, Martín
LUCCO, Juan A.
LLAVER, Santiago Felipe
MAGGI, José M.
MAGLIETTI, Alberto R.
MALDONADO, Carlos A.
MANSILLA, José R.
MARSICO, Adalberto O.
MARTINEZ, Ramón S.
MARTÍNEZ RAYMONDA, Rafael J.
MASSOLO, Eduardo A.
MÉNDEZ DOYLE, Abel Victor
MIGANNE, Carlos J.
MINSK, Hugo E.
MOLINAS, Ricardo F.
MOR ROIG, Arturo
MOSSET ITURRASPE, Mario
MUNIAGUREIA, Camilo

MUNIZ, Ramón A.
MURATORI, Eduardo D.
MURMIS, Oscar
MUSACCHIO, Vicente M.
MUSITANI, Héctor Francisco
NOUGUÉS, Isaías J.
OCAMPO, Carlos E.
OREJA, Pablo Fermín
ORTIZ HERNÁNDEZ, Angel H.
PATLIS, León
PEDRINI, Ferdinando
PENA, Roberto M.
PEREIRA, Antonio
PÉREZ, Raúl
PERNASSETTI, Horacio
PESSINO, Felipe
PICADO, Estanislao
PIZARRO, Teodosio F.
RASINES, Osvaldo Gregorio
REQUENA, Raúl María
RIAL, Oscar
RITACCO, Araldo A.
RODRIGUEZ, Rogelio Ramón
RODRIGUEZ DEL REBOLLAR, José
RODRIGUEZ VAGARÍA, Eduardo
ROIS, Roberto
ROMEU VERDIER, Gabriel
ROSITO, M. Oscar
ROUZAUT, Adolfo E.
ROZAS, José E.
RUIZ, Amalio David
RUIZ, José Oscar
SAGO, Fayiz
SALADO, Francisco A.
SANDLER, Héctor R.
SARRULLE, Oscar E.
SCARPELLO, Cayetano
SCHAPIRA, David
SCHAPOSNIK, Eduardo C.
SERÚ GARCÍA, Alberto
SOLANA, Jorge D.
SOLARI, Eduardo A.
SOLARI, Juan Antonio
TARULLI, Pascual
TORREIRO, Raúl
TORRIGLIA, Enrique F.
TORTONESE, Dante Oscar
TRÓCCOLI, Antonio A.
VACCAREZZA, Eduardo H.
VALENTE de PÉREZ TOBT, Lidia
VÁZQUEZ POL, José
VEDIA, Enrique de
VENTEMIGLIA, Rogelio A.
VILLANUEVA, Julio A.

ZANONI, Juan Claudio
ZARRIELLO, Raúl Jorge

AUSENTES, EN COMISION:

ANTÓN, Luis
AVETA, Francisco O.

AUSENTES, CON LICENCIA:

BOFFI, Luis L.
COGGIOLA, Luis S.

SCALITER, Juan
VACA LOBO, Juan Manuel

AUSENTES, CON AVISO:

CORNEJO LINARES, Juan Carlos
DÍAZ O'KELLY, Felipe F.
FERRARI, Luis
MERCADO, José Ignacio
MONTE, Ricardo Alvaro
PALACIOS, Alfredo L.

POSSE, Melchor S.
ROBERTO, Mario

AUSENTES, SIN AVISO:

DÍAZ, Diógenes C.
LLORENS, Héctor
PENA Y LILLO, Silvestre
PÉREZ GALLART, Alcides B.
RENÉ, José María
TACHELLA, Eliberto S. J.
VIÑALS, Fernando J.

SUMARIO

- 1.—**Manifestaciones en minoría.** (Pág. 6818.)
- 2.—**Continuación de la sesión.** (Pág. 6819.)
- 3.—**Moción del señor diputado Seru García** en el sentido de que la Honorable Cámara se aparte del reglamento para considerar un proyecto de declaración. Se rechaza. (Pág. 6819.)
- 4.—**Cuestión de privilegio** planteada por el señor diputado **Oreja**. Pasa a comisión **Moción** del señor diputado **Oreja** en el sentido de que la Honorable Cámara se aparte del reglamento para considerar un proyecto de resolución. Se rechaza. (Pág. 6819.)
- 5.—**Estatuto de los Partidos Políticos.** Consideración en particular de los dictámenes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda (orden del día 417). (Pág. 6821.)
- 6.—**Cuestión de privilegio** planteada por el señor diputado **Seru García**. Pasa a comisión. (Página. 6849.)
- 7.—**Estatuto de los Partidos Políticos.** Continúa la consideración del asunto que se registra en el número 5 de este sumario. (Pág. 6850.)
- 8.—**Apéndice.** (Pág. 6852.)

Asuntos entrados:

- I.—**Proyecto de declaración** del señor diputado **Sarrulle** y otros relacionado con el episodio registrado en Río de Janeiro con motivo del regreso del ex presidente de la Nación don Juan Domingo Perón. (Página 6852.)
- II.—**Proyecto de resolución** del señor diputado **Oreja**: pedido de informes relacionado con el regreso del ex presidente de la Nación don Juan Domingo Perón. (Pág. 6853.)

—En Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre de 1964, a la hora 11 y 10:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Presidente (Mor Roig). — El señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, diputado Belgrano Rawson, acaba de po-

ner en conocimiento de esta Presidencia que la comisión, que ayer prolongó sus tareas hasta altas horas de la noche, proseguirá ahora su labor buscando la coincidencia de los distintos sectores en aquellos puntos del proyecto de Estatuto de los Partidos Políticos respecto de los cuales existen opiniones divergentes, y estima que esta tarea podrá demandar aún unas horas.

Ante esta situación, la Presidencia sugiere que el cuarto intermedio se prolongue hasta las 15.

Tiene la palabra el señor diputado Abalo.

Sr. Abalo. — Iba a hacer la misma indicación para que no se malogre la sesión de hoy y para facilitar la labor de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Coincido con la Presidencia en que el cuarto intermedio se prolongue hasta las 15.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Si hay asentimiento, continuará el cuarto intermedio hasta las 15.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Invito a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio hasta la hora indicada.

—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 11 y 12.

—A la hora 16 y 20:

Sr. Presidente (Mor Roig). — Señores diputados: la Presidencia informa que el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, señor diputado Belgrano Rawson, ha comunicado que esa comisión tiene tarea todavía para aproximadamente una hora y media. En consecuencia, se sugiere a los señores diputados prorrogar este cuarto intermedio hasta las 18.

Sr. Elena. — No hay ningún inconveniente, sobre todo si es una sugestión del señor presidente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Muchas gracias, señor diputado.

Si hay asentimiento, se procederá en la forma indicada.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Invito a la Honorable Cámara a continuar en cuarto intermedio hasta las 18.

—Continúa el cuarto intermedio.

claró a los periodistas: "Este es un problema que lo resuelve exclusivamente el gobierno del Brasil, y nosotros no tenemos ninguna intervención en la solución de ese problema, de tal modo que dicho asunto dependerá de lo que quiera hacer el gobierno del Brasil." Segundo: si tiene conocimiento de que la Cancillería brasileña, en la fecha, ha expedido un comunicado oficial que expresa: "En atención a un pedido argentino y dentro del más amplio espíritu de amplia cooperación y amistad existente entre los dos países, el gobierno brasileño convino en detener en Río de Janeiro el viaje que el señor Juan Domingo Perón realizaba en un avión de Iberia." Tercero: si es cierto que con fecha 13 de diciembre de 1963 la Cancillería argentina admitió haber remitido el oficio y los antecedentes relativos al pedido judicial de extradición del ex presidente Perón a la embajada en Madrid, para su presentación ante las autoridades españolas. Cuarto: si es cierto que el canciller Zavala Ortiz declaró en Lima, el 10 de septiembre de 1964: "El retorno de Perón a la Argentina lo resolverán los tribunales y no el gobierno, ya que se trata de un asunto puramente jurídico, pues Perón es requerido por las autoridades argentinas acusado de violación de una menor."

Sr. Garófalo. — Y de otros delitos.

Sr. Pedrini. — El compañero Garófalo está ofuscado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvanse no dialogar los señores diputados. Se está dando lectura del proyecto presentado por el señor diputado Oreja.

Sr. Secretario (Oliver). — «Quinto: si a pesar de los antecedentes expresados, el canciller argentino, en representación del gobierno, ha adquirido compromisos o suscrito acuerdos con los países limítrofes, para lograr que eventualmente se detuviera al ex presidente Perón durante su tránsito por sus territorios.»

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Señor diputado Zarriello: se está dando lectura por Secretaría.

Sr. Zarriello. — Cordialmente, le digo que tenga mucho cuidado...

Sr. Presidente (Mor Roig). — El señor diputado no está en el uso de la palabra.

Sr. Secretario (Oliver). — «Sexto: si es cierto que el ministro del Interior, doctor Palmero, declaró en su despacho a los periodistas, a las 0.30 del día de hoy: "Ignoro cuáles son las determinaciones del viajero, pero aprecio que si ha decidido regresar a Madrid es por propia determinación." Séptimo: qué misión cumplía el avión argentino que, según la información periodística, fue obligado a descender a las 8.50 del día de ayer en el aeropuerto de Carrasco (Uruguay), tripulado por oficiales y suboficiales de la Aeronáutica Argentina y a cuyo bordo viajaban numerosas personas.»

Sr. Minsk. — El famoso retorno es el retorno a Madrid.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Señor diputado: la Presidencia le solicita que respete al señor secretario, que está dando lectura de un proyecto.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Señores diputados: si no se guarda el orden debido, la Presidencia procederá a suspender la sesión.

Sr. Secretario (Oliver). — «Octavo: si como conclusión de todo lo acontecido no estima que en última instancia y con menoscabo para la soberanía nacional, haya sido un militar extranjero, el general Castello Branco, presidente del Brasil, quien, a pedido del gobierno argentino, resolviera un problema de política interna de nuestro país. *Pablo Fermín Oreja.*»

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar la moción formulada por el señor diputado Oreja, de apartarse del reglamento. Se requieren tres cuartas partes de votos.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Belnicoff. — Es una declaración de amor no correspondido.

—Resulta negativa de 76 votos; votan 108 señores diputados (1).

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

Sr. Elena. — Lo traicionaron ayer y lo volverán a traicionar hoy.

Sr. Presidente (Mor Roig). — No está en el uso de la palabra, señor diputado Elena.

Sr. Elena. — Hay que destacar la traición...

Sr. Presidente (Mor Roig). — No interrumpa el señor diputado. No está en el uso de la palabra.

5

ESTATUTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa la consideración en particular del dictamen de la mayoría de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda, contenidas en el Orden del Día 417, sobre Estatuto de los Partidos Políticos.

Tiene la palabra el señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson. — Señor presidente: en la tarde de ayer, cuando se aprobó en general el proyecto de ley orgánica de los partidos políticos, solicité, en nombre de la Comisión de

(1) Véase el proyecto en el Apéndice (Asuntos entrados).

Asuntos Constitucionales, un cuarto intermedio, que en ese momento estimamos prudente, de una hora. Tengo que pedir excusas a la Cámara por haber prolongado ese espacio de tiempo más allá de lo calculado.

La comisión ha estado trabajando anoche hasta la una de la madrugada, toda la mañana de hoy y parte de esta tarde con los autores de las discrepancias parciales, y en una tarea laboriosa, de la cual se irá informando a medida que se traten los diversos artículos del proyecto, y se ha logrado coincidencia en algunos aspectos que son fundamentales.

En consecuencia, estimo innecesario aplicar el procedimiento que ayer se convino en la Comisión de Labor Parlamentaria de realizar una especie de segunda ronda de debate para que cada grupo expusiera, en un término breve, sus discrepancias generales. Por lo tanto, considero prudente entrar directamente al tratamiento en particular del proyecto.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 19.

Se va a votar.

— Resulta afirmativa de 79 votos; votan 98 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 20.

Se va a votar.

— Resulta afirmativa de 90 votos; votan 101 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 30.

Tiene la palabra el señor diputado Maldonado.

Sr. Maldonado. — Propongo que, como parte final del inciso c) del artículo 30, se agreguen las palabras «sobre la base del voto directo de sus adherentes».

En el proyecto que se considera no figura esta exigencia, que considero indispensable para la efectiva organización democrática de todos los partidos políticos argentinos.

Sostengo que deben aplicarse con la máxima intensidad en las cartas orgánicas de los partidos políticos los principios consagrados en la ley electoral Sáenz Peña, naturalmente que en la parte que sea compatible con los partidos políticos. El voto directo del afiliado o adherente es la esencia de la democracia en las organizaciones políticas.

Pido, pues, que se ponga este agregado a consideración de la Honorable Cámara.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson. — La comisión no va a dar en cada caso los motivos por los cuales acepta o no acepta modificaciones o agregados al proyecto, en razón de que esto ha sido debatido en forma exhaustiva.

Con relación al agregado que propone el señor diputado Maldonado, señalo que la comisión no lo acepta.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Musacchio.

Sr. Musacchio. — Solicito que el artículo 39 se vote por incisos, porque el bloque que represento va a pedir la supresión del inciso b).

Sr. Presidente (Mor Roig). — Si así lo solicita el señor diputado, de acuerdo con el reglamento se procederá de esa manera. ¿El pedido que hace el señor diputado se refiere sólo a la votación?

Sr. Musacchio. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Lejarraga.

Sr. Lejarraga. — Pido la palabra para cuando se trate el inciso b).

Sr. Presidente (Mor Roig). — Está en consideración el artículo en su totalidad. Solamente la votación se hará por incisos, señor diputado.

Sr. Lejarraga. — Entonces, voy a objetar el inciso b) del artículo 39, que dice: «Doctrina que en la determinación de la política nacional promueva el bien público a la vez que propugne expresamente el sostenimiento del régimen democrático, representativo y republicano, y el de los principios y los fines de la Constitución Nacional.»

Con respecto a este inciso, voy a pedir la supresión de su segunda parte, con lo cual quedaría limitado a los siguientes términos: «Doctrina que en la determinación de la política nacional promueva el bien público.» La supresión que proyecto no afectaría la voluntad democrática que inspira el estatuto, desde que a lo largo del texto del proyecto hay disposiciones que complementan en forma definida el sentido democrático del mismo.

Si no prosperara esta supresión, voy a proponer, oportunamente, un agregado al inciso, que diría así: «... sin perjuicio de la reforma total o parcial de la Constitución Nacional que prevé el artículo 30 de la misma».

Comienzo por declarar que sustento como convicción y sostengo firmemente la necesidad de que en mi patria se practique el régimen democrático representativo y republicano, y que tengo adhesión, honda adhesión, en lo esencial, a los principios y fines de la Constitución Nacional. Pero, en tratándose del estatuto de los partidos políticos, que encarnan y representan intereses sociales, corrientes de opinión, ideologías, entiendo que este concepto no juega, no está en discusión. El inciso b), en la forma en que está redactado, podría hacer suponer que propugna el principio de lo que podríamos llamar la inmutabilidad de la Constitución Nacional, lo que no puede ser aceptado, y, por lo demás, está negado por el propio texto constitucional.

Y hablando de la Constitución Nacional, siento necesidad de decir una palabra de su valor

histórico, de su mérito conceptual, en una expresión de mis sentimientos, que estimo en el caso oportuno. Permítamelo la Honorable Cámara.

Es la Constitución Nacional de 1853 que nos rige la ley fundamental de la República elaborada por una ilustre generación argentina. Muchas veces se ha dicho con razón, y repito, que ella resume la pasión de nuestros guerreros, la meditación de nuestros pensadores, el ensueño de los grandes luchadores de la libertad; y que condensó, también, las aspiraciones y los anhelos de un pueblo.

Resultado y síntesis de un largo y doloroso proceso histórico esta Constitución significó también un verdadero programa del porvenir en su hora y para la vida argentina por su amplitud y por sus perspectivas. Pero es evidente que una generación de argentinos no puede encadenar a las futuras generaciones en la continuidad histórica nacional y que las nuevas generaciones tienen derecho a revisar el texto constitucional para adecuarlo a las exigencias de los nuevos tiempos y a las aspiraciones del pueblo argentino en su evolución histórica.

Sr. Gutiérrez. — Está fuera de la cuestión, señor diputado.

Sr. Lejarraga. — Es oportuna la referencia que estoy haciendo a la Constitución Nacional, porque el texto del inciso b) del artículo 39, que consideramos, parecería forzar a los partidos políticos a propugnar el sostenimiento de un régimen constitucional determinado, a propugnar el sostenimiento de los principios y fines de la Constitución Nacional. Y yo empezaré preguntando: ¿cuáles son los principios y fines de la Constitución Nacional? Por aquí, uno podría contestarme: los principios y fines de la Constitución Nacional están dados en su preámbulo; y por allá se me podrá decir: están dados en el capítulo primero, denominado declaraciones, derechos y garantías. Pero tanto uno como otro son reformables.

Pero, aparte de esto, es sabido que el capítulo de las declaraciones, derechos y garantías resume, en última instancia, una organización jurídico social, un sistema jurídico-institucional que el pueblo argentino tiene derecho a reformar, a modificar, en la forma que ya he expresado, y que, por lo mismo, no puede ser proclamado como inmutable e inmodificable.

Por eso entiendo que —sin mengua de esta adhesión, de esta devoción, podría decir, que he expresado por la Constitución Nacional en su sentido histórico y en sus valores más fundamentales— no debe figurar en el Estatuto de los Partidos Políticos una exigencia de tal naturaleza, ya que los partidos políticos son la expresión orgánica de manifestaciones de vida social, que laten en sus entrañas, que se dirigen al perfeccionamiento institucional, al cambio de sus bases o estructuras, y pueden por lo mismo propiciar reformas a la Constitución Nacional

que las condensa, lo cual, como he dicho, está previsto en el propio texto de nuestra Ley Fundamental.

Ahora mismo, partidos políticos de las más distintas significaciones ideológicas, de la más distinta composición humana y social, están hablando con alguna insistencia del cambio de estructuras, que ya va siendo algo así como un denominador común de algunos partidos. El cambio de estructura, si de cambio de estructuras en verdad se trata, no puede ir referido sino, en cierto modo y en muchos aspectos, a las bases jurídicas, económicas y sociales de la Constitución que está en vigencia y que, entre paréntesis, tiene ya una duración de cien años.

En una sesión anterior dijo el señor diputado García que en la Constitución Nacional había una parte dogmática, imponente, creo que la llamé, que estaría por encima de la propia Constitución, y que sería, en cierto modo, intocable. Yo quedé un tanto sorprendido por la afirmación, que me trajo el recuerdo de una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, a la que tuve ocasión de asistir, en la cual un asesor del Ministerio del Interior, distinguido constitucionalista, dijo que la reforma de la Constitución no podía alcanzar a la reforma del régimen federal.

Sr. Ritacco. — El señor diputado no está en la cuestión.

Sr. Sago. — Señor presidente: que se ajuste al tema en debate el orador.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Señor diputado Lejarraga: algunos señores diputados señalan que no está en la cuestión.

Sr. Lejarraga. — ¡Cómo no voy a estar en la cuestión, si el inciso que estoy considerando dice que los partidos políticos deben propugnar expresamente el sostenimiento de los principios y fines de la Constitución Nacional, y yo a ese concepto me estoy refiriendo!

Sr. García. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Lejarraga. — ¡Cómo no!, señor diputado.

Sr. García. — Creo que el señor diputado está en la cuestión, pero, naturalmente, con discursos de la extensión que está pronunciando, se corre el riesgo de malograrse la tarea en que todos estamos empeñados. Por eso me voy a permitir hacer una exhortación general a efectos de que las exposiciones sean breves.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Lejarraga.

Sr. Lejarraga. — Aprecio lo que dice el señor diputado, pero no me parece correcto que por anticipado se pretenda neutralizar una exposición destinada a fundamentar un concepto. No se puede privar a un legislador de hacer uso de la palabra cuando se está animado de la preocupación de perfeccionar una norma legal.

Estoy en el centro mismo de la cuestión, señor presidente, tanto lo estoy que en la noche de ayer y en el día de hoy he asistido a las reuniones de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y puedo decir a la Cámara que el tema de más encontrado debate fue, precisamente, este inciso del artículo 3º, en el que no pudo lograrse la conciliación. Hay que reconocer que esta comisión ha cumplido un gran esfuerzo, acercando distancias y uniformando distintas opiniones; pero desgraciadamente no ha podido entenderse en la elaboración que se ha intentado de una fórmula para sustituir el inciso b) del artículo 3º.

¿Cuántos minutos tengo para mi exposición, señor presidente?

Sr. Presidente (Mor Roig). — Diez minutos, señor diputado.

Sr. Lejarraga. — Voy a abreviar, entonces, mi intervención, en un intento de resumen.

Pensaba hacer un análisis de instituciones de nuestra Constitución que están precisamente contenidas en el capítulo de las declaraciones, derechos y garantías, especialmente las relacionadas con el trabajo y la propiedad, y que nosotros, los socialistas argentinos, al igual que otros partidos o sectores, queremos modificar, rectificar y superar.

El señor diputado García decía en una reunión anterior que ciertos principios —que él llamó *creo supraconstitucionales*— han tenido una larga elaboración a lo largo del siglo XIX. Pero ahora estamos en pleno siglo XX, y yo preguntaría al señor diputado si todo el proceso del constitucionalismo social no se ha producido en este siglo, sobre todo a partir de la primera guerra mundial. Ese constitucionalismo social que en alguna medida se ha incorporado a la propia Constitución a través del artículo 14 bis. El propio sector a que pertenece el señor diputado ha colaborado en la Constitución para incorporar a su texto ese artículo 14 bis, en el que se han recogido orientaciones de tipo social.

Voy a concluir mi exposición, porque quiero contribuir, abreviando mis palabras, a la rápida sanción de este estatuto que el país aguarda. Sólo quiero decir a los señores diputados —que con tanta insistencia han hablado de la parte dogmática de la Constitución— que si hacemos referencia a dogmas, admitiendo convencionalmente el término, en esta materia habrá dos dogmas: el de la libertad de pensamiento y el de la soberanía popular. La libertad de pensamiento implica el derecho de manifestarse y expresarse plenamente, y en cuanto se trata del pensamiento político significa realizarse políticamente por intermedio de los partidos políticos, dando cauce, organicidad y fuerza al propio pensamiento. Y este inciso es contrario a ese principio de la libertad de pensamiento, ya que legítimamente puede surgir en el país un partido político —nosotros somos una expresión de ello— que apa-

rezca con un ideario social y económico que implique una profunda revisión de la Constitución Nacional.

El otro principio que resultará afectado por este inciso es el de la soberanía popular, al que no deben oponerse barreras de este tipo, desde que la Constitución no es más que una manifestación, todo lo excepcional y reglada que se quiera, de esa soberanía popular. Y quiero volver ahora a la anécdota que no pude referir a raíz de una interrupción, y con esto termino. Asistía a una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, decía, y el distinguido constitucionalista rechazaba en absoluto que pudiera modificarse el régimen federal que la propia Constitución establece, y yo tras mi sorpresa, en ese momento recordaba que en el país hubo tendencias unitarias, y hasta un partido político surgido para propugnar con la reforma de la Constitución el régimen unitario, que fue prestigiado por un gran dirigente, Rodolfo Rivarola, que fue un eminente constitucionalista. Nuestro asesor y profesor excluía por la vía de la reforma constitucional, el cambio del régimen federal. Esto implicaría que la única posibilidad que entonces se abriría al pueblo, si profesara un credo político que no fuera el federal, el unitario, por ejemplo, sería el camino de la violencia y de la revolución, puesto que el camino constitucional, de acuerdo con esa interpretación, estaría obstruido. Nosotros aspiramos a que la reforma de la sociedad argentina, por profundas que las modificaciones sean, se realice dentro del cauce de la legalidad constitucional, dentro de la democracia, incluso mediante la reforma constitucional, como la establece la propia Constitución Nacional.

Yo hubiese querido hacer, como lo he dicho, un análisis de las instituciones de la parte titulada dogmática de la Constitución; no he podido hacerlo por el plazo realmente brevísimo en el que he debido desarrollar mi pensamiento. Concluyo diciendo que el desarrollo de la sociedad argentina, bajo los principios de la libertad y de la justicia, puede exigir y exige que algunas de esas instituciones de nuestra Constitución sean modificadas, por el camino que la misma Constitución establece, y no puede entonces establecerse en este estatuto disposición que pueda interpretarse, cuestione o sea obstáculo a este derecho eminente del pueblo de darse sus instituciones y forjar su propio porvenir.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Serú García.

Sr. Serú García. — No, señor presidente. En representación de nuestro bloque va a hacer uso de la palabra el señor diputado Catalán.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Catalán.

Sr. Catalán. — Nuestro bloque propuso, oportunamente la supresión del inciso b). Dicha supresión la va a sostener en esta oportunidad,

porque considera que todas las leyes, que todo el orden jurídico, que todas las organizaciones en sus distintos campos, están sujetos incuestionablemente a las bases constitucionales. Vale decir que repetir aquí ese concepto de sujeción a principios que son fundamentales dentro de nuestro sistema representativo republicano y federal es, por cierto, una redundancia.

Por otra parte, en el inciso c) del artículo 7º ya se determina que los partidos deberán formular una declaración de principios y programas, principios y programas que, indudablemente, deberán estar ajustados a las bases de la Carta Magna.

Vale decir, señor presidente, que entendemos que se incurre en una redundancia y consideramos que, en cierta medida, ese inciso es inadecuado dentro de la técnica legislativa y del conocimiento que se debe tener de la Constitución.

Por estas breves razones, vamos a sostener la supresión del inciso b) del artículo 3º.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Vedia.

Sr. Vedia. — Señor presidente: nuestro bloque va a proponer, por mi intermedio, la sustitución del inciso b) del dictamen por otra redacción. Trataré de ser breve para evitar mayores dilaciones en la labor de la Cámara.

Además de una deficiencia de redacción que surge del propio párrafo inicial del inciso, en la referencia a una «doctrina que en la determinación de la política nacional promueva», nos parece que los conceptos que contiene son erróneos o no suficientemente comprensivos de lo que en el espíritu, tal vez, quiere decir este inciso.

El bien público, por ejemplo, no es el bien de toda la comunidad, o puede no ser el bien de toda la comunidad. No es el bien común, que es el bien de todos y cada uno de los habitantes o integrantes de la sociedad.

La referencia al régimen democrático y representativo nos parece una redundancia. Obsérvese que en los 110 artículos de la Constitución Nacional no hay una sola mención, una sola referencia a la palabra «democrático». Comienza por decir que adopta para nuestro gobierno la forma republicana, representativa y federal. Y pienso que en el concepto de representatividad está, desde ya, comprendida la esencia de un régimen democrático. Es decir, hace referencia a que en el pueblo se encuentra la fuente generadora del poder público y de los gobernantes.

Además, nos parece errónea y peligrosa la referencia a los principios y fines de la Constitución Nacional. En la Comisión de Asuntos Constitucionales nos hemos preguntado, y no hemos encontrado respuesta: ¿cuáles son los principios y los fines de la Constitución Nacional? ¿Es el régimen financiero de la Constitución? ¿Son las relaciones con la Iglesia Católica? ¿Es el régimen de la propiedad? Por ello,

nos parece que una referencia tan lata, sin siquiera señalar la posibilidad de modificar estos principios y fines a través del procedimiento constitucional, significa incluir una norma que el día de mañana puede ser utilizada con arbitrariedad contra cualquier fuerza o expresión política.

Por estas razones, nosotros proponemos una redacción que exige, entre los requisitos que se imponen a los partidos políticos en este artículo, el «compromiso de promover el bien común, sostener las formas representativas de gobierno y reconocer y garantizar los derechos humanos y cívicos ratificados por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, sancionada por la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948».

Nos parece conveniente esta mención expresa a ese documento magnífico que es la declaración de las Naciones Unidas, votada por cuarenta y cuatro naciones con la abstención de la mayoría de las del mundo comunista, porque en él hay una referencia concreta y completa a todos los derechos, libertades y garantías que atañen a la dignidad del hombre y a la exigencia de la pluralidad en la sociedad común y en la sociedad política. Inclusive, se hacen referencias muy concretas a los derechos y garantías procesales, a los derechos de emigración y asilo, a la libertad de religión y de pensamiento, a los derechos sociales y a la seguridad de la familia. Nos parece que este documento, que por cierto fue ratificado por la Nación Argentina, bien merece ser mencionado en forma expresa en el estatuto que discutimos.

Para terminar, señalo que en el inciso que proponemos decimos «...ratificados por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre...» porque reconocemos que estos derechos, o muchos de ellos, tienen un reconocimiento anterior en nuestra propia Constitución Nacional.

Por estas razones, vamos a votar la sustitución del inciso b) del artículo 3º por el que nuestro bloque propone.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Almada.

Sr. Almada. — Señor presidente: nosotros vamos a proponer un agregado al artículo 3º, incorporado como inciso d). Sería el siguiente: «La no subordinación con respecto a entidades o partidos internacionales, o a Estados, partidos o personas extranjeras o domiciliadas en el extranjero.» Como consecuencia de este agregado, el inciso d) del dictamen pasaría a ser inciso e).

Al propiciar este agregado tenemos muy en cuenta la situación real de nuestro país y los antecedentes inmediatos de la política argentina. No estamos, pues, ante una mera abstracción. Para que un estatuto como este de partidos políticos o para que una ley cualquiera funcione y cumpla sus objetivos, es decir, para que se dé lo que define plenamente un estado

de derecho, esto es, impersonalidad y universalidad de la ley, es necesario que haya bases de igualdad y de responsabilidad. Entendemos que para que exista un régimen democrático de gobierno, que es, en definitiva, el objetivo perseguido por esta ley, debe estar garantizado por ciertas bases de sustentación, tales como la de igualdad y de responsabilidad de los participantes y, además, preservado en su esencia y en su sustancia por la solidaridad de todos los partidos políticos.

En una palabra, es necesario para que la política argentina vuelva a los cauces normales de los partidos que cada uno de éstos esté dispuesto a actuar asumiendo responsabilidades y atendiendo fundamentalmente al país, por sobre las conveniencias de los grupos políticos que no pueden actuar desentendidos del país, desarraigados de él y comprometido más con planes políticos de perturbación, que a fines efectivos de solidaridad entre los argentinos.

La democracia debe funcionar sobre las bases que el país institucionalmente le ha asignado. Por democracia se entiende, desde luego, la periodicidad de los mandatos, la regularidad de los comicios, la separación de los poderes, la representatividad auténtica, el respeto a las minorías dentro de los partidos y fuera de ellos; pero también es fundamental para que la democracia funcione la responsabilidad común y conjunta de todos los partidos políticos. El ideal del país será dado, en política, cuando los argentinos no tengamos sobresaltos por los resultados de un comicio, cuando no sea fundamental para nosotros, es decir, cuestión de vida o muerte, quién sea el ganador, sino tan sólo por sus consecuencias previstas. Lo que queremos prevenir es que no pasemos de la noche a la mañana de la democracia a la dictadura por el voto de los ciudadanos. Y mucho menos cuando ese régimen dictatorial se instalaria sobre la base de signos conocidos y bajo inspiraciones, intenciones y digitaciones políticas, a cubierto de las cuales estamos en el deber de poner al país. Lo queremos hacer, no sólo a través de esta ley, sino también exhortando a los ciudadanos a que reflexionen sobre su responsabilidad y sobre sus deberes cívicos.

El ideal de este país, como el ideal de otros países democráticos, consiste en que las bases de sustentación de su régimen no se alteren por la victoria de uno u otro partido. Así ocurre en las grandes democracias: Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Nosotros aspiramos a que aquí también haya bases de sustentación que den por sí mismas a las instituciones la adecuada protección, a fin de que no tengamos necesidad de estar sancionando leyes de este tipo, que en alguna medida pueden significar una discriminación, pero que de todos modos ello hará a la defensa de la democracia en función de los peligros actuales y también —esto es muy impor-

tante— de los males, de los vicios o de los riesgos de que hemos salido ajenos y con graves dificultades.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Rozas.

Sr. Rozas. — En rigor, nosotros estamos dispuestos a adoptar, en el debate en particular del proyecto, una actitud muy sobria, porque comprendemos que existe verdadera urgencia en llegar a la sanción final, que parece no ser tan fácil y, sobre todo, no tan corta. Pero he sido un poco incitado a decir muy pocas palabras porque en cierto modo se ha aludido a varias ideas fundamentales sustentadas por nosotros, que parecieran estar cercenadas en sus posibilidades de expansión en virtud del inciso b) del artículo 3º, en cuanto obliga a todos los partidos a propiciar los principios y los fines de la Constitución Nacional.

Tengo siempre un sentido de la época y de las circunstancias vigentes cuando se trata de contribuir a dar normas de orden legal, porque no concibo que en nuestra pequeñez de hombres pretendamos prevenir los siglos que vengan. Estamos legislando para una época y para circunstancias determinadas, y si una proposición para esa época y para esas circunstancias llena una finalidad mensurable, aceptable, hemos de sancionarla, sin perjuicio de posponer la realización de postulaciones más vastas y más generales para nuestra acción continuada, para nuestra acción posterior.

Tengo de la ley un concepto muy relativo, no obstante lo cual estimo que los fines y principios de la Constitución Nacional tienen una vivencia, un vigor de vida, que autorizan a defenderlos, dejando de lado las relativas contradicciones que pudiera haber en un momento determinado entre nuestra ideología, nuestro ideal general, nuestros vastos conceptos de la transformación social, en mérito y en obsequio a las necesidades y las conveniencias de la época que nos toca vivir ahora. ¿Quién ha de negar que nuestra Constitución, a través de sus principios y de sus fines, tiene actualidad, tiene vivencia y necesita todavía defender al país y ser defendida?

Hemos cruzado por dificultades muy diversas, al punto de no haber advertido suficientemente el valor considerable, extraordinario, de nuestra Carta Fundamental. Y esto no implica que muchos de nosotros no tengamos que mantenernos firmes en algunas concepciones básicas de nuestro pensamiento y de nuestra doctrina.

Comprendo bien que, en principio, esta Constitución del año 1853 necesita algunas reformas, sobre todo en orden al desarrollo social operado desde entonces, y, en cierta medida, en el aspecto particular de la propiedad es evidente que precisa ser reformada. Acaso ya lo ha sido por los hechos en una gran medida, porque la ley, dentro de la elasticidad de interpretación cons-

titucional, ha alterado mucho los viejos conceptos del derecho civil antiguo, del derecho romano.

Pero no encuentro que haya disparidad entre la defensa de los principios y los fines de la Constitución y la postulación para su oportunidad, de aquellas reformas que pudieran significar una transformación fundamental de algunos de estos principios o de estos fines, porque la propia Constitución autoriza la reforma, está en las propias previsiones que ella contiene la posibilidad de realizar las reformas. Es ínsita esta concepción, naturalmente que en el curso del desarrollo de la acción política de los partidos puedan propiciarse esas postulaciones que importen la reforma de la Carta Fundamental. Es decir, que en la dinámica de los partidos haya la posibilidad de defender los postulados, aun de reformas más fundamentales y más profundas, de la Constitución.

Pero cuando leemos este dispositivo del proyecto no debemos ver, así de una manera particular o fragmentaria, la significación que tienen los principios y los fines de la Constitución. En realidad, cuando se expresa así el concepto del proyecto, se está refiriendo al totum de la Constitución, a lo esencial de ella, no a la letra, a la primera, a la segunda o a la última letra de la Constitución; se está refiriendo al conjunto, a lo que es medular, a lo que forma en sustancia la Constitución Nacional.

De manera tal que a mi modo de ver esta postulación de la comisión es asequible, es oportuna y necesaria, muy particularmente por las vicisitudes, por las crisis que ha vivido la República en sus últimos decenios. Si fuéramos a ratificar este concepto, podríamos decir que la tesis que sustentamos está también justificada por la flexibilidad que tiene nuestra Constitución, la flexibilidad que le ha permitido adaptarse en mucho al juego de la historia, a la transformación de la vida.

El propio texto constitucional consagra esa flexibilidad en términos que yo quiero resumir leyendo el artículo 33 de la Constitución, en cuanto da la oportunidad de comprender que la concepción de ella va mucho más allá de lo que resulta expresamente previsto en su texto. Dice el artículo 33: «Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.»

En obsequio a la señal de la luz que me está indicando el término de mi breve exposición, reitero que me place mantener y ratificar con mi voto los principios y los fines de nuestra Constitución.

Dr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado González Bergez.

González Bergez. — En este artículo hay algunas modificaciones a que yo me referiré

durante la discusión en general, vinculada con el inciso b) que han mencionado recién los señores diputados Rozas, Vedia y Lejarraga.

En términos generales estoy de acuerdo con casi todo lo que se ha dicho; inclusive estoy de acuerdo con los principios y los fines de la Constitución Nacional, en una forma más amplia que muchos de los partidos que legítimamente actúan en el campo político argentino.

A mí no me resultaría incómodo, personalmente, o para mi actuación política, esta exigencia de la ley; pero comprendo que no puedo imponer, ni debo ni tengo el derecho de imponer mi criterio o el de mi partido a los demás partidos políticos. Si hubiese una necesidad absolutamente indispensable de referirse a los fines y principios de la Constitución Nacional en la ley de los partidos políticos, si no hubiese una manera de eludir esta mención aquí, manteniendo sin embargo los propósitos que ilustran el despacho que se considera, yo diría que tendríamos que pasar por alto todas las objeciones de forma —si así quiere llamárselas— que puedan hacerse a este inciso.

Pero no se trata de esa situación. El inciso exige a los partidos que tengan una «doctrina que en la determinación de la política nacional promueva el bien público, a la vez que propugne expresamente el sostenimiento del régimen democrático, representativo y republicano», y por otro lado, el sostenimiento de los principios y los fines de la Constitución Nacional. Confieso, paladinamente, que no sé lo que quiere decir esto de la doctrina «en la determinación de la política nacional». Si el régimen democrático, representativo y republicano está contenido en los principios de la Constitución Nacional, no habría que mencionarlo paralelamente a esos principios. Si los principios son algo más que ese régimen, entonces ya entramos en un terreno peligroso porque, ¿cuáles son los principios de la Constitución Nacional? Algunos son absolutamente indiscutibles, y estoy seguro de que todos nos pondríamos de acuerdo al enumerarlos; y para sostenerlos. Por supuesto, el régimen representativo y republicano, y también el régimen federal que, sin embargo, la comisión no ha querido mencionar expresamente.

Pero, ¿dónde terminan los principios de la Constitución y comienzan las normas orgánicas? Eso es muy difícil de decir. Por ejemplo, el sostenimiento del culto católico apostólico romano es uno de los principios de la Constitución y, sin embargo, no están de acuerdo con él todos los partidos, ni se puede exigir a todos los partidos que lo apoyen expresamente. Confieso que yo, en esta materia, no tengo problemas, pero me hago cargo de los problemas que legítimamente pueden tener los demás.

Dentro de los principios de la Constitución también está un determinado sistema de distribución de los poderes y funciones entre las provincias y el gobierno central, así como de

los tres poderes del gobierno central entre sí. El sistema de división de los poderes, por cierto, es propio del sistema republicano de gobierno. No hay sistema republicano sin división de poderes; pero no es absolutamente necesario que los poderes se dividan tal y cual están divididos y delimitados en nuestra Constitución, para que haya un sistema republicano. Alguien podría pretender que se diesen más facultades al Poder Legislativo, al Judicial o al Ejecutivo, modificando, sin embargo, así, principios que son de la Constitución, pero no el principio de la forma republicana de gobierno. Y los partidos que eso propugnaban, como dice el artículo de la ley, estarían en contra de la doctrina que la ley les exige sostener.

No se diga, señor presidente, que podrían proponer la reforma de la Constitución, porque la Constitución es reformable en el todo y en cada una de sus partes, según lo establece explícitamente. Eso es otra cosa. Hace a su sometimiento a la legalidad. Pero no se puede sostener que un partido, contrario a un determinado principio de la Constitución Nacional, se somete sin embargo a esta norma de la ley mientras pretende que la Constitución sea reformada para que así tal principio sea modificado o eliminado del texto constitucional. No se debe confundir la cuestión de procedimiento con respecto a la reforma de la Constitución para lograr la alteración de sus principios, con la cuestión de fondo, que consiste en estar de acuerdo o en desacuerdo con esos principios, que es a lo que se refiere el inciso b) del artículo 3º.

Por eso y porque me parece que pueden lograrse fórmulas más valiosas que la que se ha propuesto, es que yo he señalado en mi disidencia parcial que se debe decir esta otra cosa, que por segunda vez leo en este recinto: que la existencia de los partidos requerirá «la declaración y práctica —la práctica es tan importante como la declaración— de una doctrina política que propugne expresamente el respeto de los derechos humanos y el régimen republicano democrático, con pluralidad de partidos actuando en libertad».

Estas son las cosas que fundamentalmente nos interesa que los partidos sostengan y a las que estén adscritos, para admitirlos en la acción política en el seno de nuestra sociedad. No que estén conformes en todas sus postulaciones con cada uno de los principios y con todos los fines de la Constitución Nacional, que son esencialmente reformables según lo establece la propia Constitución.

Estos son, señor presidente, los fundamentos, sucintamente expresados, por los cuales propongo la sustitución del inciso b) de la comisión, por el inciso b) de mi artículo 3º, que consta en la página 2.346 del orden del día que tenemos en nuestras bancas.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Casas.

Sr. Casas. — No voy a insistir con la posición ya formulada por el señor diputado Catalán, en representación de nuestro bloque, quien ha sustentado la tesis, en el sentido de suprimir totalmente el inciso b) del artículo 3º. He pedido la palabra porque quiero hacer pública ante la Honorable Cámara la verdadera inquietud que me han producido las palabras del señor diputado Almada.

En ese sentido, voy a permitirme exhortar a los señores diputados a que con respecto a este punto hagan exactamente lo mismo que hizo la Comisión de Asuntos Constitucionales, es decir, el rechazo total de esa proposición. No puede ser de otra manera, porque si a través de todo este debate los diversos bloques parlamentarios vienen sosteniendo la tesis de que el espíritu que orienta y guía a este Estatuto de los Partidos Políticos es la ausencia absoluta de toda proscripción, acontece que la posición del señor diputado Almada significa en la práctica intentar realizar un propósito de proscripción, porque entendemos que ésa es la finalidad que guía esa tesis.

La argumentación y proposición del señor diputado Almada constituye a esta altura del debate —permítaseme la expresión— una verdadera barbaridad, por cuanto, después de lo que se dijo en el sentido de que es necesario que los argentinos se respeten y comprendan, para realizar la gran jornada hacia el futuro y para lograr los grandes ideales de la patria, no me explico cómo ahora pretende el señor diputado Almada volver al pasado, para, a través de odios y persecuciones, preconizar nada menos que la liquidación de la soberanía popular que, como bien lo ha recalcado recientemente el señor diputado Rozas, está perfectamente establecida como obligación constitucional en el artículo 33 de nuestra Carta Magna.

Sr. Almada. — ¿Me permite una aclaración, señor diputado?

Sr. Casas. — Encantado, señor diputado.

Sr. Almada. — Nuestra proposición no está destinada, de ninguna manera, a impedir la expresión de la voluntad ni de la soberanía popular, ni a sostener proscripciones contra sector alguno del pueblo argentino; está destinada a impedir el juego político de combinaciones contrarias a los intereses de la Nación y a los intereses que esta ley quiere proteger, que es el régimen de la democracia, de muchos partidos, pero funcionando en igualdad de condiciones y en igualdad de responsabilidades. Es decir, no queremos partidos que jueguen a la política en la Argentina, siguiendo estrategias que no sean las que convienen a la Argentina y al régimen político que nosotros sustentamos, que es una cosa muy distinta de lo que pretende hacerme decir el señor diputado Casas. Pero veo que, lamentablemente, no obstante que —como él muy bien ha manifestado— se ha dicho que este estatuto es para crear condiciones de pacificación, de igualdad y de respon-

sabilidad para todos los argentinos, aquí se sigue pretendiendo jugar a la estrategia contraria al país, enmascarado de mayorías populares que yo quisiera que fuesen de cualquiera de los partidos políticos aquí representados y no que le pertenecieran o se pretendiera, como se pretende, que pertenecen a juegos políticos o combinaciones contrarias a los intereses de la Nación, según ya hemos visto, y que es, en definitiva, lo que ha quedado vencido en el país. Mi proposición no es para volver al pasado, ni para remontar la corriente; se funda en la responsabilidad actual y en los deberes y compromisos políticos de mantener intacto el régimen democrático para el futuro.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Casas.

Sr. Casas. — Señor presidente: evidentemente, las palabras del señor diputado Almada corroboran lo que estaba diciendo. Esas palabras destilan la preeminencia en su espíritu del deseo de volver al pasado, con los odios y revanchismos.

Insisto: ésta es una ley que será aplicada por hombres y, en consecuencia, es necesario no introducir frases que den oportunidad a los jueces de la República a que entronquen persecuciones o proscripciones.

Por otra parte, me extrañan las palabras del señor diputado Almada, porque ayer, al empezar mi exposición, declaré en esta Cámara que soy peronista con Perón, y porque lo soy sostengo que vamos a organizar el movimiento desde abajo hacia arriba, en un sentido absolutamente republicano y democrático. En consecuencia, pretender incluir la cláusula que propone el señor diputado Almada sería lo mismo que si nosotros propiciáramos que en este estatuto queden proscriptos los partidos de centro porque en alguna oportunidad el Partido Conservador realizó el denominado fraude patriótico en la República.

La República y todos los señores legisladores estamos de acuerdo y creemos en las palabras de los partidos de centro que, como bien lo dijo el señor diputado Jofré, han condenado los actos de fraude del pasado. Nosotros también reconocemos nuestros defectos, pero exaltamos las grandes virtudes de nuestro movimiento. Por ejemplo, estamos en contra de la organización digitada, de las delegadas censistas y de los interventores de partido, pero exaltamos las virtudes del movimiento.

Por eso, exhorto nuevamente a la Cámara —y pido disculpas por mi larga exposición y por mis expresiones vehementes, motivadas por la intervención del señor diputado Almada— a que dé un paso hacia adelante y mire hacia el futuro, abandonando definitivamente el sistema de las proscripciones, y abramos la República al juego limpio, para que se aplique en plenitud aquel sagrado principio de la Constitución que garantiza permanentemente el ejercicio de la soberanía popular. Lo exhorto a que con libertad

política marchemos hacia el futuro y a que, lo mismo que hizo la Comisión de Asuntos Constitucionales, rechace decididamente esta proposición del señor diputado Almada.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Maldonado, para su segunda intervención.

Sr. Maldonado. — Entiendo que la redacción del inciso b) del artículo 3º, está correctamente realizada.

Los señores diputados Rozas, González Berges y Almada acaban de emitir conceptos de carácter constitucional, con los que coincido absolutamente, razón por la cual no he de incurrir en repeticiones.

Se ha manifestado hace un momento que nuestra Constitución Nacional en ningún artículo emplea la palabra o término «democracia». Eso es verdad, pero, ¿por qué motivos nuestra Constitución no emplea ese término? Porque la democracia está insita en todos los artículos de la Constitución, inclusive en su propio Preámbulo. Esa es la tradición histórica argentina, desde mayo de 1810.

Por otra parte, se hace necesario dejar establecido lo que debe entenderse por norma y por ley. La norma es el concepto filosófico del derecho. La ley es el concepto positivo, obligatorio, coercitivo. La primera es, diría, de carácter moral.

Así también, no hace mucho, en esta misma Cámara, un señor diputado manifestó que en ninguna parte nuestra Constitución emplea el término «privada», para referirse a la propiedad. Sin embargo, el artículo 17 de nuestra Carta Magna, en forma expresa, dice: «La propiedad es inviolable...», etcétera. Allí se establece el concepto de propiedad privada, que también es norma y no ley.

En este orden de ideas, también podría decirse que nuestro Código Penal —y ningún código penal que yo conozco lo hace— establece la prohibición de matar. Sin embargo, nuestro código y todos los códigos penales condenan el homicidio. Sería fácil decir que no estando prohibido matar no debe condenarse a quien comete el delito de homicidio. Pero es que el no matar no es materia de la ley; es materia de la norma, de la moral, es uno de los mandamientos a que toda la civilización actual está sometida y conformada, de acuerdo con ese elevado precepto moral.

Es decir, entonces, que nuestra Constitución Nacional no necesita establecer el principio democrático, porque está entendido en la norma y no en la ley.

Se ha hecho referencia también a la declaración de los derechos humanos sancionada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Esta declaración, que tengo en mi pupitre, es también una elevada concepción moral y, además, lo que es curioso y

satisfactorio para los argentinos, muchos de sus preceptos coinciden en lo esencial con nuestras disposiciones constitucionales, especialmente en su primer capítulo, cuando habla de las Declaraciones, Derechos y Garantías.

Con permiso de la Presidencia y de la Honorable Cámara voy a recordar lo que establece el artículo 7º de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos: «Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley.» Aquí viene lo original y satisfactorio para los argentinos. El artículo 16 de la Constitución de Alberdi dice: «La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley.» Hay una coincidencia absoluta entre nuestra Constitución y la Declaración de los Derechos Humanos.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Señor diputado: ha vencido el término.

Sr. Maldonado. — Para terminar, reitero que el inciso b) del artículo 3º, que estamos considerando, está, a mi juicio, correctamente redactado y solicito que la Honorable Cámara le dé su aprobación.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pereira.

Sr. Pereira. — Nuestro bloque ha fijado ya en la discusión en general las reservas y discrepancias que le merecen este estatuto de los partidos políticos, en razón de las excesivas reglamentaciones que contiene; reglamentaciones que no aventan la suspicacia y que no aseguran libertad suficiente a los partidos para actuar en el ámbito nacional, reglamentarismo que queda librado a la interpretación y a la hermenéutica de la justicia especial ad-hoc creada por el artículo 6º, y que pone en peligro la ciudadanía y la hace temer con respecto a las posibilidades que le quedan para concurrir a comicios sin proscripciones.

Por ello, y atentos también a otras manifestaciones hechas esta tarde en el recinto con respecto a la redacción redundante y oscura de los incisos b) y c), nuestro bloque va a pedir la supresión de ambos incisos. Entendemos que es suficiente garantía para la vida política del país que los partidos acepten simplemente circunscribirse a los amplios y sólidos marcos de la Constitución Nacional.

Además —y pido que la comisión reflexione—, observamos la redacción del inciso a) de este artículo 3º, en cuanto esa redacción habla de «grupos de ciudadanos unidos por un vínculo permanente». Entendemos que la expresión utilizada hace un tanto ininteligible la norma, porque debo confesar que no sé concretamente a qué tipo de vínculos ni a qué permanencia puede referirse. Creemos que la redacción quedará más clara si establecemos simplemente que los partidos políticos estarán constituidos por gru-

pos de ciudadanos que en carácter o calidad de afiliados o adherentes, acepten y se sometan a los principios, carta orgánica o estatutos de los partidos que integran, y constituyan los padrones o registros partidarios.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Solana.

Sr. Solana. — En primer término, deseo llamar la atención sobre una circunstancia de procedimiento que se está presentando en este momento con relación al tratamiento del artículo 3º. Estamos considerando simultáneamente el texto del inciso b) de este artículo y la inserción de otro inciso propuesto por el señor diputado Almada. En la medida de lo posible, el señor presidente debería arbitrar los medios para evitar la confusión que resulta de que algunos señores diputados se refieran al inciso b) y otros al inciso nuevo propuesto. Habría que tratar primero el inciso b) y luego la cláusula nueva que se propone, a fin de ordenar la discusión. Si esto no fuera posible, sugeriría que, a indicación de la Presidencia, se volvieran a reunir los presidentes de bloque a fin de arbitrar otro procedimiento que permita avanzar en la consideración de este proyecto, ya que de lo contrario dicha consideración se dilatará excesivamente en un debate confuso y desordenado.

Refiriéndome brevemente a la propuesta del señor diputado Almada y ampliando las razones que en nombre de nuestro bloque ha dado el señor diputado Casas, debo decir que de admitirse el texto que propone el señor diputado, se introduciría un factor de perturbación. Precisamente constituye un progreso en el contenido del proyecto la supresión del antecedente del decreto ley todavía vigente en cuanto a la mención, como causa que después sirvió para proscribir al justicialismo, de la dependencia de supuestas órdenes o indicaciones de personas residentes en el extranjero.

En este aspecto debo señalar que los grandes movimientos de liberación nacional de Latinoamérica, por regla general, han sido orientados por líderes y por verdaderos conductores exiliados en otros países, líderes que más de una vez han regresado a sus países para asumir la primera magistratura. Basta citar los casos de Paz Estenssoro; del presidente Arévalo, de Guatemala; del presidente Velasco Ibarra, del Ecuador; de los grandes orientadores, como Haya de la Torre, y, en otro orden de ideas, como los cubanos, que en estos momentos dirigen movimientos políticos contra Castro.

Es evidente que no puede admitirse de ninguna manera la introducción en la ley de los partidos políticos, como factor que sirva para proscribir grandes movimientos de liberación nacional, el hecho de que dependan de líderes exiliados en el extranjero.

Lo que se pretende es volver a poner en manos de los órganos jurisdiccionales nuevos ins-

argumentos para la proscripción del justicialismo, esto debe decirse con toda claridad. Nosotros nos oponemos a ello con toda vehemencia y energía. Esa es la posición de nuestro bloque, bien conocida de todos y reiteradamente expuesta. Por eso pedimos que no se admita la proposición del señor diputado Almada.

Sr. Presidente (Mor Roig).— Tiene la palabra el señor diputado Musacchio, a quien le corresponden cinco minutos, por tratarse de su segunda intervención.

Sr. Musacchio.— Muy brevemente, señor presidente, para decir lo siguiente: cuando se trató en general este proyecto de ley yo sostuve que había dos clases de control en este tipo de estatuto: el control interno de la vida de los partidos políticos y el control doctrinario de esos mismos partidos políticos. Y yo sostuve que con respecto al primero de esos controles, o sea, al que iba a la vida democrática interna de esas entidades, estábamos de acuerdo en que se reglamentaran mediante la ley, la forma y los procedimientos correspondientes; pero también sostuvimos que no podía hacerse el control doctrinario, porque eso significaba caer en el caos y en la discusión de acuerdo con la interpretación de los términos.

Este debate que se está haciendo respecto de la interpretación del inciso b) no hace más que ratificar la solidez de nuestro pensamiento. No nos ponemos de acuerdo en esta Honorable Cámara respecto de la interpretación de lo que son principios y fines de la Constitución Nacional, de lo que es democracia y de lo que significa la República. ¡Ni pensar lo que puede ocurrir en la interpretación judicial!

Por eso, y porque este inciso está relacionado con los artículos 21 y 22, que son evidentemente proscriptivos —con respecto a los cuales, en su oportunidad, el presidente de nuestro bloque expondrá el pensamiento del partido—, es que sostenemos la supresión lisa y llana del inciso a que hago referencia.

Sr. Presidente (Mor Roig).— Tiene la palabra el señor diputado García.

Sr. García.— Muy brevemente, señor presidente, a pesar de que algunas alusiones hechas en el debate pueden dar fundamento y base a la réplica, sobre todo las formuladas por el señor diputado Lejarraga.

La comisión entiende que la redacción del inciso impugnado por varios oradores anteriores es perfectamente clara, que sus conceptos pueden ser desarrollados sin el menor género de duda, que son ampliamente comprensivos de una realidad necesaria para imponerlo como recaudo sustancial a la vida de los partidos políticos; por todas estas consideraciones mantiene el texto del despacho.

Sr. Presidente (Mor Roig).— Tiene la palabra el señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson.— Señor presidente: voy a permitirle hacer una exhortación a los

colegas con quienes discutimos esta tarde el despacho sobre estatuto de los partidos políticos.

Durante casi ocho meses, en la Comisión de Asuntos Constitucionales primero y luego juntamente con las de Justicia y de Presupuesto y Hacienda, se ha discutido este dictamen con intensidad y profundidad, que ha tenido amplia difusión pública, con la impresión de anteproyectos de dictamen corregidos reiteradas veces. La tarea ha significado —como lo dije en el tratamiento en general— un esfuerzo de todos los sectores políticos sin excepción, para lograr un instrumento útil para la vida política del país. Durante la discusión en general, en largos y numerosos discursos, se ha expuesto la posición de todos los bloques representados en este cuerpo; y ayer, señor presidente, en un cuarto intermedio que se pidió alrededor de las 19 horas, se reinició en la Comisión la discusión de una serie de artículos con la presencia de autores de observaciones y de otros señores diputados que quisieron participar en la reunión. Pero ahora se traen nuevamente al recinto estas cuestiones.

No dudo de que, reglamentariamente, todos los diputados tenemos derecho a plantear nuestras posiciones y a plantearlas en el término que el reglamento permite. Pero si en cada artículo de los ochenta y tantos que conforman este dictamen, vamos a repetir los argumentos dados en la discusión de comisión y en la discusión en general, este proyecto no va a salir ni hoy ni mañana ni la semana que viene. Y quiero señalar algo que es muy importante. Hay muchos síntomas a través de los comentarios de la prensa y de los comentarios callejeros de que el Parlamento con este desborde verbal en que insiste permanentemente, lejos de prestigiarse, se va desprestigiando. Si este asunto ha sido discutido, todo lo que se reitere ahora es superabundante.

Digo esto en este tono —no tengo otro—, pero con una gran cordialidad y con un profundo deseo de que mis palabras sean recogidas en su auténtica intención y tratemos de avanzar en la sanción de este proyecto.

La comisión, como ha dicho el señor diputado García, no acepta modificar el texto del artículo 3º, salvo en dos pequeños detalles, que son de forma.

En el inciso a) acepta incorporar, por considerarlo más correcto, la palabra «político», a fin de que el inciso quede así: «Grupo de ciudadanos unidos por un vínculo político permanente.»

Sr. Pereira.— ¿Me permite una aclaración, señor diputado?

Sr. Belgrano Rawson.— Sí, señor diputado.

Sr. Pereira.— En oportunidad de formular mi observación me referí no solamente al concepto de vínculo sino también a la permanencia de ese vínculo, y dije que no podíamos cristalizar la permanencia de un vínculo indeterminado.

Por eso propuse que la constitución de los partidos estuviese dada por grupos de ciudadanos que en calidad de afiliados o adherentes integren sus padrones aceptando su doctrina y su carta orgánica. El concepto de vínculo me parece un poco ambiguo y vago, y en cuanto a lo de permanente, se me ocurre que para los afiliados o adherentes a un partido no podemos introducir ningún tipo de solidaridad permanente.

Sr. Belgrano Rawson. — El concepto de vínculo está aclarado más adelante, cuando se habla de la afiliación o vinculación del afiliado con el partido.

La comisión se mantiene en lo que he señalado. Acepta incorporar la palabra «político» en el inciso a), después de la palabra «vínculo». Y en cuanto al inciso d) acepta la supresión de la frase «a los efectos de su existencia legal», pues al incorporarla se ha deslizado un error, dado que ello ya está dicho en el encabezamiento del artículo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Si hay asentimiento, se votará en primer término el encabezamiento del artículo 3º, después el inciso a) y a continuación se enunciarán por Secretaría las modificaciones propuestas al inciso b).

—Asentimiento.

—Se llama para votar.

—Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Mor Roig). — Como en el recinto hay 83 señores diputados, mientras que en la casa hay 107, se procederá a pasar lista a fin de obtener número.

—Mientras se pasa lista:

Sr. Presidente (Mor Roig). — En este momento hay quórum estricto.

Sr. Catalán. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Catalán.

Sr. Catalán. — Como la Honorable Cámara tendrá que realizar votaciones repetidas, solicitaría al señor presidente que exhortara a los señores diputados a no abandonar el recinto.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia, recogiendo las palabras del señor diputado Catalán, exhorta a los señores diputados que se encuentran en el recinto, así como a los que están en la casa, a que procuren facilitar la sanción de los artículos que sucesivamente deben votarse, manteniéndose en el recinto.

Se va a votar, en primer lugar, el encabezamiento del artículo 3º.

—Resulta afirmativa de 94 votos; votan 99 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el inciso a) con el agregado propuesto por la comisión.

Sr. Muñiz. — ¿Cómo es el agregado, señor presidente?

Sr. Presidente (Mor Roig). — Consiste en intercalar la palabra «político».

Se va a votar.

—Resulta afirmativa de 94 votos; votan 99 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el inciso b).

Por Secretaría se dará lectura a las distintas proposiciones.

Sr. Secretario (Oliver). — Proponen la supresión del inciso b) los señores diputados Musacchio, Bogliano —en una observación formulada que está impresa—, Catalán y Pereira. El señor diputado Lejarraga propone, además, la supresión del segundo párrafo del inciso, quedando en consecuencia, el mismo así redactado: «Doctrina que en la determinación de la política nacional promueva el bien público».

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar, en primer término, la redacción propuesta por la comisión.

—Resulta afirmativa de 91 votos; votan 99 señores diputados.

Sr. Lejarraga. — Pido que el inciso b) se vote por partes.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Ya se ha votado íntegramente, señor diputado; y, en consecuencia, de hecho quedó rechazada la indicación del señor diputado de suprimir la segunda parte del inciso.

Por Secretaría se va a dar lectura del agregado, que también propone el señor diputado Lejarraga al inciso ya votado.

Sr. Secretario (Oliver). — Al final del inciso iría el siguiente párrafo: «... sin perjuicio de la reforma total o parcial de la Constitución que prevé el artículo 30 de la misma».

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿La comisión acepta el agregado?

Sr. Belgrano Rawson. — No lo acepta porque está sobreentendido que la Constitución se puede reformar. Lo dice ella misma.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el agregado propuesto por el señor diputado Lejarraga y que la comisión no acepta.

—Resulta negativa de 92 votos; votan 100 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el inciso c).

Por Secretaría se enunciarán las indicaciones propuestas.

Sr. Secretario (Oliver). — El señor diputado Pereira ha pedido la supresión del inciso, y el señor diputado Maldonado propone como agregado, al final, lo siguiente: «... sobre la base del voto directo de los adherentes».

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar, en primer lugar, la redacción propuesta por la comisión.

— Resulta afirmativa de 86 votos; votan 105 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el agregado propuesto por el señor diputado Maldonado, que la comisión no acepta.

— Resulta negativa de 71 votos; votan 106 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Por Secretaría se va a enunciar el inciso propuesto por el señor diputado Almada, que iría a continuación del c) y que pasaría a ser d) en caso de ser aceptado.

Sr. Secretario (Oliver). — Como inciso d), nuevo, el señor diputado Almada propone el siguiente: «La no subordinación con respecto a entidades o partidos internacionales, o a estados, partidos o personas extranjeras o domiciliadas en el extranjero.» Y agregar como inciso e) el inciso d) del despacho de la comisión.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el inciso nuevo propuesto por el señor diputado Almada y que la comisión no acepta.

— Resulta negativa de 71 votos; votan 107 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el inciso d).

Sr. Secretario (Oliver). — La comisión propone suprimir el resto del inciso a partir de las palabras «...a los efectos de su existencia legal».

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el inciso d) con la supresión propuesta por la comisión.

— Resulta afirmativa de 90 votos; votan 107 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 49.

Se va a votar.

— Resulta afirmativa de 96 votos; votan 107 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 59.

Tiene la palabra el señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson. — La comisión ha aceptado una ligera modificación de forma.

Después de las palabras «autoridades nacionales», se propone agregar: «y así mismo a los que concurren a elecciones». Se suprime la conjunción «y». De tal manera que el artículo quedaría redactado en la siguiente forma: «Esta ley es de orden público y se aplicará a los par-

tidos que intervengan en la elección de autoridades nacionales, y así mismo a los que concurren a elecciones municipales de la ciudad de Buenos Aires y territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.»

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Maldonado.

Sr. Maldonado. — Para proponer un pequeño agregado al que, no obstante, le atribuyo importancia para nuestra República. Propongo que después de las palabras «Tierra del Fuego» se agregue «las Malvinas», continuando con la redacción actual del proyecto. A pesar del respeto que me merecen los miembros de la comisión, movidos indudablemente por un alto espíritu patriótico, diré que no me convence el término genérico de Islas del Atlántico Sur.

Cuando se consideró en esta Cámara su reglamento interno, en que se hacía referencia a esas islas, dije algo al respecto. Creo que nada se perdería y sí mucho se ganaría estableciendo que legislamos en forma expresa también para nuestras islas Malvinas.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson. — La comisión no acepta la proposición del señor diputado en razón de que el nombre oficial es Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Si la Presidencia no está equivocada, cree que la denominación oficial es Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En consecuencia, habría que hacer la corrección.

Sr. Belgrano Rawson. — Sí, señor presidente, y comprendo, desde luego, las islas Malvinas.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 59 conforme con la redacción propuesta por la comisión, con el agregado del artículo «la».

— Resulta afirmativa de 95 votos; votan 106 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 69.

Tiene la palabra el señor diputado Ferreira.

Sr. Ferreira. — En el día de ayer nuestro sector político fundamentó su total discrepancia con el dictamen de la mayoría, referida, en primer término, a la subsistencia que este despacho consagra de la llamada justicia nacional electoral. Sin perjuicio de nuestra discrepancia general con este dictamen, en esta oportunidad en que se lo trata en particular, vamos a hacer moción concreta en el sentido de sustituir el artículo 69 del despacho de la comisión, por el siguiente: «La aplicación de las disposiciones de esta ley estará a cargo de los jueces encargados del registro electoral en cada uno de los distritos electorales. Derógase el decreto ley 7.163/62 y sus concordantes y se restablece la competencia que tenían en materia electoral los

jueces y las cámaras federales a la fecha de la sanción de dicho decreto ley.»

No voy a abundar en fundamentos sobre esta proposición. He sostenido en el día de ayer que no se trata de una justicia electoral integrante del Poder Judicial de la Nación la que reconoce el despacho, sino de un cuerpo electoral nacional que está ligado al ministerio político del Poder Ejecutivo, es decir, al Ministerio del Interior. Esta circunstancia fue admitida por el propio señor ministro del Interior, doctor Palmero, en oportunidad en que una delegación de nuestro partido lo entrevistó, cuando fue consultado por dicho ministro sobre las bases del estatuto político que elaborara y que ulteriormente fue elevado a esta Cámara.

Sostengo además que los integrantes de esta justicia, que reconoce o confirma el dictamen de la mayoría, me refiero a la Cámara Nacional Electoral, carecen del status de magistrados judiciales. Son pseudo magistrados, y la Cámara Nacional es una pseudo magistratura judicial. No es exacto que en la realidad esta Cámara pertenezca al Poder Judicial de la Nación, aunque lo diga por ahí un decreto ley del gobierno defacto.

Termino, porque no quiero abundar en otras consideraciones, dando por reproducidas las que emití en oportunidad de hablar en la sesión de ayer, y trayendo en apoyo de lo que estoy sosteniendo un antecedente nuevo. El actual partido gobernante, en oportunidad de dictarse en la época del gobierno defacto del doctor Guido y del ministro del Interior doctor Adrogué, el decreto ley que instituyó esta justicia electoral nacional, lo impugnó por inconstitucional, y el memorial que fue presentado a la Corte Suprema de Justicia impugnando de inconstitucional este decreto ley lo suscribe el actual ministro de Educación y Justicia, doctor Alconada Aramburú.

Creo que con estos argumentos le será fácil a la comisión admitir la sustitución del artículo 6º por el nuevo texto que propicio.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Solana.

Sr. Solana. — Con otros diputados de este bloque hemos auspiciado el reemplazo del artículo 6º, en el sentido de sustituir la Justicia Nacional Electoral por la justicia federal, en un orden de ideas coincidentes con las expuestas por el señor diputado Ferreira, pero estamos dispuestos en este momento —así lo anticipo— a declinar nuestra propuesta para adherir lisa y llanamente al texto que propone el señor diputado.

Voy a dar muy brevemente las razones. Si bien teóricamente existirían fundamentos como para pensar en la conveniencia de instituir una justicia especializada en lo electoral, hay también graves razones que aconsejan en esta oportunidad no incluir en la ley este órgano jurisdiccional. La Cámara Nacional Electoral, que es lo único que se constituyó para aplicar el esta-

tuto todavía vigente, nació mal y funcionó peor. En su aplicación práctica sirvió para convalidar un fraude electoral: el del 7 de julio de 1963. Recuerda nuestro sector de qué manera se anularon las listas de lectores para presidente y vicepresidente de la República en las provincias de San Luis, Jujuy y Salta, mientras se estaba votando el domingo, día del comicio.

Fue una justicia dócil a las órdenes de quienes en ese momento detentaban el Poder Ejecutivo. Y en este momento esta justicia aparece con magistrados propuestos y con acuerdo del partido que detenta el Poder Ejecutivo y que va a tener a su cargo la aplicación de esta ley nueva.

Queremos que este estatuto se encuentre alejado de toda sospecha, sobre todo porque por primera vez se van a dar al organismo jurisdiccional facultades de importancia en la organización interna y en la plataforma partidaria, así como en la proclamación de candidatos y en todo lo atinente al funcionamiento de los partidos políticos.

Sr. Rouzaut. — Esos magistrados tienen acuerdo del Senado.

Sr. Solana. — El Senado prestó estos acuerdos con una mayoría parlamentaria del partido cuyos representantes están hoy en el Poder Ejecutivo.

Decía que queremos alejar a estos magistrados de toda sospecha. Queremos que haya una justicia insospechable. Comprendan los señores diputados que nuestro sector no tiene ningún motivo especial para propiciar el desplazamiento de este órgano jurisdiccional por los órganos normales de la justicia federal. Tampoco nosotros hemos contribuido para nada a la formación e integración de la justicia federal. No tenemos magistrados adictos ni de nuestra ideología, pero tenemos confianza, por la práctica judicial y sobre todo porque no es la justicia designada para aplicar esta ley, que aplicará la misma con mayor idoneidad e imparcialidad.

Estas son las razones por las cuales nuestro sector adhiere a la proposición del señor diputado Ferreira.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Muñiz.

Sr. Muñiz. — La Justicia Nacional Electoral fue creada por decreto 7.163, dictado por el gobierno defacto del ex presidente Guido. La circunstancia de que por tal motivo no haya podido ser estudiado el asunto por la Honorable Cámara, me determina a manifestar que nuestro sector es partidario de la Justicia Nacional Electoral, especialmente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Electoral.

El pensamiento de nuestro partido no fue generado por el decreto 7.163, sino que venía de mucho tiempo atrás. Fue el Partido Socialista Argentino, si no me equivoco, de los primeros —acaso el primero— que señaló la necesidad de una justicia especializada en esta materia.

Por esa razón votaremos a favor del artículo en discusión, máxime en atención a que la Justicia Nacional Electoral integra el Poder Judicial de la Nación, vale decir, que se desenvolverá con toda independencia y autonomía que es propia del Poder Judicial.

Debo aclarar, también, que sin desconocer algunos errores cometidos por la Cámara Nacional Electoral —los eternos e inevitables errores humanos—, y los que fueron consecuencia de la forma como se tuvo que organizar, sobre la marcha, en vísperas de los últimos comicios, aun computando los errores de este tipo, la Cámara Nacional Electoral ha cumplido una gran labor y hago votos para que en el futuro la mejore en beneficio de los partidos políticos y del régimen electoral.

Por estos motivos sostendremos, como anticipé, el despacho de la comisión tal como ha sido redactado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado García.

Sr. García. — Señor presidente: la comisión mantiene su despacho, no sin antes decir que la Justicia Electoral Nacional, creada como fuero específico, ha sido objeto, por parte de dos señores diputados preopinantes, de un ataque tan notoriamente injusto como señalado por absoluta ligereza.

Respondiendo a la alusión del señor diputado Ferreira quiero manifestar que cuando la Unión Cívica Radical impugnó la creación de la justicia electoral especializada fue porque no estaba incorporada al sistema del Poder Judicial de la Nación, lo que naturalmente daba base a esa impugnación. Pero el motivo ha desaparecido, y eso no puede ignorarlo el señor diputado, desde que, por decreto 6.407/63, este fuero especializado, útil para el país porque va a realizar la unificación de las normas jurisprudenciales que estructurarán un futuro derecho político y electoral, está incorporado con plenitud de atributos al Poder Judicial de la Nación. Es decir, integra el poder emanado del artículo 94 de la Constitución Nacional. Tiene, en consecuencia, en cuanto a su origen, el acuerdo del Senado, que ha sido otorgado por nuestro partido, porque no podía ser de otra manera. Tenían que ser los representantes de uno de los partidos —en este caso el mayoritario en el Senado— el que prestara necesariamente el acuerdo, que puede haber sido votado incluso —lo ignoro en este momento— por correligionarios de los señores diputados impugnantes o pertenecientes a otro sector.

En segundo término, en virtud de esta incorporación al Poder Judicial de la Nación goza de la garantía esencial de inamovilidad que confiere el artículo 96 de la Constitución.

En tercer lugar, reconoce la superintendencia de la Corte Suprema de Justicia en la regulación de su actividad interna. Por otra parte, conozco personalmente a dos de los miembros designa-

dos para integrar esa Cámara Nacional Electoral: el doctor César Enrique Romero y el doctor Adolfo González Albarracín, ambos probos, honorabilísimos magistrados, que han desempeñado su cometido en la provincia de Córdoba; uno, destacado publicista de nuestro derecho público, que preside justamente la cámara. No merecían de ninguna manera esta ligera apreciación que se ha lanzado, hasta el punto de presentarlos como meros dependientes que van a ser instrumento al servicio del Ministerio del Interior cuando, por todas las razones anteriores, se ha demostrado acabadamente que esa posibilidad no existe. Ellos lo van a demostrar a breve plazo al país con sus fallos y con su conducta, como apreciarán los señores diputados, que no está justificada esta ligereza de expresión con respecto a hombres que merecen nuestro mayor respeto.

Finalmente, decía que la vinculación de la Cámara Electoral Nacional con el Ministerio del Interior es a los efectos presupuestarios y financieros, igual a la que existe entre el resto del Poder Judicial de la Nación y el Ministerio de Educación y Justicia. Se trata de una conexión lógica, por razones obvias, y que no autoriza a juicios como el emitido.

Esta justicia electoral especializada, que tiene un ámbito de acción propio y que se hace ya necesaria en el país, reúne todos los atributos del Poder Judicial de la Nación, de acuerdo con los artículos 94 y 96 de la Constitución Nacional. Su vigencia es necesaria, y por estas razones sostenemos que debe ser incorporada a nuestra legislación como un paso positivo en la evolución y desarrollo de nuestro derecho político y electoral.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Ferreira, para una segunda intervención.

Sr. Ferreira. — Señor presidente: no merecen un largo debate las palabras vertidas por el señor diputado García porque mis impugnaciones de la víspera y de hoy han quedado firmes. He sostenido ayer que al Estatuto de los Partidos Políticos no hay que examinarlo solamente a través de los principios de la doctrina política, sino también de la realidad concreta, de la experiencia recogida y de las circunstancias presentes que caracterizan al acontecer nacional.

He dado casos concretos respecto a la actuación de la Cámara Nacional Electoral. En su anterior composición, los casos en que le tocó definir en la instancia previa al comicio del 7 de julio, y en su actual composición, referida al fallo donde se privó a nuestro partido de su nombre.

No quiero abrir debate sobre este asunto porque ayer he sido muy claro en la calificación formulada a la Cámara Nacional Electoral. He sido muy concreto al respecto. Afirmo que en materia de principios es muy probable

que casi todos estemos de acuerdo, pero en la apreciación de la realidad concreta y en la actuación típicamente política de esa cámara, en su anterior composición y en la actual, se confirman los juicios que he emitido y que, de ninguna manera, son producto de una ligereza de mi parte porque no es mi conducta parlamentaria conducirme de este modo. Admito, eventualmente que puedo estar en el error, pero no pecar por ligereza.

Además, quiero dejar sentado que de los preceptos del decreto ley de creación de esta cámara nacional surgen numerosísimos elementos de juicio probatorios de que no es un organismo integrante del Poder Judicial. La proposición de nombramiento de sus integrantes no la hace el ministro del ramo —como en el caso del Poder Judicial—, sino el ministro político del Poder Ejecutivo, cual es el ministro del Interior. Los requisitos para el nombramiento de los camaristas son distintos, así como también lo son las facultades disciplinarias, la división en salas, etcétera. Las relaciones con el Poder Ejecutivo se entablan por intermedio del ministro del Interior, y no, como en el Poder Judicial, por intermedio de la Corte Suprema de Justicia y por vía del ministro de Justicia.

No voy a repetir argumentos. Simplemente reproduzco las razones circunstanciadas que desarrollé en la sesión anterior para dar respuesta cumplida a las expresiones del señor diputado García y para insistir en mi proposición de sustituir el artículo que se está considerando.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Oreja.

Sr. Oreja. — En su reciente exposición el señor diputado hizo una alusión particular a la persona del doctor César Enrique Romero, que ocupa, precisamente, la presidencia de la Cámara Nacional Electoral.

No es, por cierto, mi propósito poner en discusión la idoneidad profesional y jurídica del doctor Romero ni su probidad como funcionario; pero me parece oportuno traer a colación que en un reciente artículo —cuyo ejemplar tengo en mi poder, pero no en mi banca— de la revista especializada «La Ley», de fecha muy reciente, el doctor César Enrique Romero se refiere, precisamente, al tema de la democracia y de los partidos políticos. En sus interesantes consideraciones, en su parte final, sienta la tesis que coincide precisamente con la que la mayoría ha sostenido en este proyecto de Estatuto de los Partidos Políticos, en cuanto a la calificación de lo que es democrático y en cuanto a la interpretación de lo que debe ser el estatuto de un partido político. De tal suerte que por vía de deducción podría decirse que el doctor César Enrique Romero tiene opinión comprometida con la tesis que informa el dictamen de la mayoría.

Sr. Grau. — Es anterior, señor diputado.

Sr. Oreja. — Precisamente, porque es anterior. En alguna medida, ya el presidente de la Cámara Nacional Electoral está diciendo que coincide con la apreciación de la mayoría y que va a aplicar su interpretación.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a llamar para votar.

—Se llama para votar.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En este momento hay quórum estricto, señores diputados.

Se va a votar el artículo 6º; texto propuesto por la comisión.

—Resulta afirmativa de 65 votos; votan 97 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 7º.

Tiene la palabra el señor diputado Lejarraga.

Sr. Lejarraga. — Voy a ser muy breve, señor presidente.

Este artículo establece en su inciso a) que para la constitución de un partido político es necesaria la adhesión inicial de un número de electores no inferior al 4 por mil del total de los inscritos en el registro electoral del distrito correspondiente, hasta un máximo de un millón y sin computar el excedente.

Nosotros impugnamos este inciso porque consideramos que ese mínimo del 4 por mil es realmente excesivo para constituir un partido político. A través de esta exigencia parecería apuntar la tendencia hacia grandes y pocos partidos, tendencia que se ha visto expresada ya en forma episódica o circunstancial muchas veces en este mismo recinto y que no traduce por cierto la realidad histórica de este momento de la vida argentina.

Esa fue en alguna medida la tendencia de la ley Sáenz Peña, y en ese aspecto la ley fracasó. Esa ley Sáenz Peña todavía tiene vivencia en otros muchos aspectos, porque estableció la función del sufragio, el derecho y el deber del sufragio, el secreto del voto, el comicio limpio, el control del comicio y la garantía de los resultados electorales, tomando como base el padrón militar; pero la ley, como digo, fracasó en cuanto a esa tendencia hacia pocos partidos, y concretamente hacia dos partidos políticos. Esto que ha quedado en el pasado, apunta sin embargo en cierto modo en este inciso.

Creo que no debe establecerse una limitación de este tipo. No podemos clasificar a los partidos en grandes y pequeños desde el punto de partida, porque se trata de un criterio cuantitativo realmente superficial. La historia nos ofrece muchos ejemplos de partidos que inicialmente fueron pequeños y que con el tiempo han podido desarrollarse y transformarse en grandes fuerzas políticas. El comienzo de un partido

as como una semilla; hay que ver si prende, y si encuentra un terreno propicio, y si la semilla es bien cultivada, se puede transformar en un hermoso árbol que dé flor y dé frutos. Debemos dejar que los partidos vivan y se desarrollen o mueran en el seno profundo del pueblo, que dirá en definitiva la palabra sobre la razón de ser o no de los partidos políticos.

Por eso creo, señor presidente, que un criterio de este tipo no debe predominar. Otros son los criterios que deben tenerse en cuenta en la contemplación de este problema. Que se exija a los partidos que surjan la expresión de un pensamiento político y social definido; que se exija un funcionamiento interno de tipo democrático; que se exija —y esto es muy importante en todos los pueblos, y también en la política argentina y en la realidad contemporánea— un control severo y celoso de los fondos partidarios. Pero no establezcamos una limitación que, en última esencia, también es en algún sentido una restricción, diríamos así, al principio de la soberanía popular.

Los partidos son expresiones naturales de la vida de un pueblo, anteriores, desde ya, a la ley que los va a reconocer y a encauzar. Dejemos que los ciudadanos se agrupen libremente en partidos políticos y que se entreguen al veredicto del pueblo, que es el que va a decidir, desde ya, en la vida pública y en la lucha comicial, si esos partidos deben o no prosperar, si esos partidos han de desarrollarse o no, si habrán de transformarse en las grandes fuerzas políticas que todos aspiramos animen y fecunden la política democrática argentina.

Entiendo que la comisión, hasta con un criterio de transacción, debería ceder a disminuir ese guarismo del cuatro por mil. Me permito recordar, porque viene a mi memoria, que el estatuto del año 1956 establecía un mínimo de quinientos ciudadanos para constituir un partido político. Era un número discreto para empezar a andar. Y entre los proyectos que figuran como antecedentes del dictamen que estamos considerando, está el del señor diputado Gómez Machado, que fija el 1 por mil. Me parece exagerada la cifra, pero, en esta circunstancia, estamos dispuestos a apoyarla.

Yo termino preguntando a la comisión si mantiene ese criterio tan riguroso, tan duro, tan, en cierto modo, prohibitivo de la libertad del pueblo de organizarse en partidos políticos, no admitiendo un porcentaje más reducido que facilitará realmente la posibilidad que queremos ofrecer al pueblo de su libre organización en entidades políticas y del encauzamiento de estos partidos para que cumplan su función en la democracia argentina.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Grau.

Sr. Grau. — La comisión valora, como lo ha hecho anteriormente, durante sus reuniones, los argumentos que ha expuesto el señor diputado Lejarraga. En alguna medida los comparte, pero

la necesidad de no anarquizar la vida política le ha impuesto la obligación de establecer el requisito de un mínimo de electores, a los efectos de que la ciudadanía pueda estar representada sin que carezca de los partidos políticos necesarios como para que la interpreten en los distintos matices en que se divide la opinión pública.

El actual Estatuto de los Partidos Políticos que rige por el decreto ley 12.530, también impone ese mínimo, y la realidad en los comicios del 7 de julio de 1963 nos ha permitido apreciar cómo a pesar de esa restricción en el orden nacional se han presentado veinticuatro partidos políticos; en la Capital Federal se registró la presencia de veinticuatro partidos, en la provincia de Buenos Aires, de dieciocho; en Córdoba, de quince; en Mendoza y en Santa Fe de dieciséis, y en otras provincias de un número menor. De manera que no puede sostenerse que con ese requisito pueda haber limitaciones a la libre expresión de la voluntad ciudadana.

Destaco, además, que con el deseo de ir paulatinamente ampliando las posibilidades electorales, con motivo de la sanción de la ley que crea la institución del diputado suplente, se suprimió de la ley electoral en el párrafo 2º del título único, el inciso f), que establecía un mínimo del 3 por ciento para que pudieran ser consideradas las listas partidarias en el respectivo ordenamiento.

La comisión cree, en consecuencia, que este mínimo ayudará a encauzar a la opinión pública y no establecerá ningún tipo de restricción, ni dará lugar a nada que impida que en la sociedad germine y progrese una idea dentro de la opinión pública a través de un partido político.

Es por esto que la comisión mantiene el texto que figura en el dictamen.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 7º conforme a la redacción propuesta por la comisión.

Sr. Muñiz. — Pediría que se votara por incisos.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a llamar para votar.

—Se llama para votar.

Sr. Lejarraga. — ¿Y la recomendación de que los señores diputados permanecieran en el recinto?

Sr. Presidente (Mor Roig). — Las recomendaciones y exhortaciones no pueden más que el sentido de la responsabilidad que indudablemente debe tener cada uno de los señores diputados. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Jofré. — Solicito que se pase lista.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Por Secretaría se procederá a pasar lista.

—Mientras se pasa lista:

Sr. Presidente (Mor Roig). — En estos instantes hay número en el recinto.

Señor diputado Muñiz: la Presidencia se permitiría sugerir —con el propósito de adelantar— votar todo el artículo 7º con excepción del inciso a), que es el único cuestionado. Posteriormente se votaría éste.

Sr. Muñiz. — De acuerdo, señor presidente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 7º, con excepción del inciso a).

—Resulta afirmativa de 97 votos. Votan 104 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Con respecto al inciso a), la discrepancia entre el despacho de la comisión y la proposición del señor diputado Muñiz, estribaría solamente en el porcentaje. De acuerdo al proyecto de la comisión, es del 4 por mil; de acuerdo a la proposición del señor diputado Muñiz, sería del 1 por mil.

Se va a votar, en primer término, el despacho de la comisión.

—Resulta afirmativa de 85 votos. Votan 106 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 8º.

Tiene la palabra el señor diputado González Bergez.

Sr. González Bergez. — Me parece que es conveniente meditar un momento sobre el procedimiento que establece este artículo para el reconocimiento e inscripción para los partidos nacionales. De acuerdo con los dos párrafos del artículo, los partidos de distrito reconocidos que resolviesen actuar como partidos nacionales deberán solicitar a la justicia electoral su reconocimiento en tal carácter, cumpliendo con lo determinado en el artículo 7º. Es decir, puesto que ya son partidos de distrito reconocidos, aparentemente cumpliendo de nuevo todos los requisitos de fundación, con un número determinado de afiliados, carta orgánica, etcétera.

Según surge del párrafo primero, sobre todo en concordancia con el segundo, por el solo hecho de presentarse manifestando su voluntad de actuar como partidos nacionales y llenando estos requisitos, obtendrían ese reconocimiento, con el cual luego, posteriormente, se inscribirían en los registros correspondientes a otros distritos electorales del país, llenando en esos distritos los requisitos del artículo 7º y los que disponen los incisos del segundo párrafo del artículo 9º.

Desde luego, no es demasiado importante la diferencia entre partidos de distrito y partidos nacionales, a los efectos de la ley, pero tiene algunas consecuencias la distinción, y tanto las tiene, que la ley en todo su articulado se refiere a los partidos nacionales y a los partidos de distritos como dos cosas distintas. A título de ejemplo recuerdo que no son exactamente las

mismas las ventajas patrimoniales que tienen los partidos nacionales y los de distrito.

Lo que me parece más coherente, si lo que se quiere es que sean partidos nacionales aquellos que tienen real organización en más de dos distritos, es que antes de pedir su reconocimiento existan ya como partidos en dos o más distritos, es decir que al pedir el reconocimiento acrediten su existencia en dos o más distritos electorales del país.

Creo que está claro lo que digo, y sin abundar en mayores consideraciones propongo concretamente que este artículo 8º se sustituya por el artículo 9º de mi disidencia parcial, que contempla para la formación de los partidos nacionales este otro procedimiento, inverso al del despacho a que acabo de referirme. La única diferencia entre uno y otro, vuelvo a insistir, reside en el procedimiento para la organización y el reconocimiento de los partidos. Según el texto que propongo —y que no voy a leer porque está impreso y se halla en las bancas de todos los señores diputados—, la diferencia consistiría en una cuestión de procedimiento para el reconocimiento y organización de los partidos nacionales. Se constituirían en dos o más distritos y luego solicitarían el reconocimiento acreditando esa circunstancia ante el juez electoral del distrito de la fundación.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Catalán.

Sr. Catalán. — Solicito a la comisión que aclare perfectamente bien el contenido de este artículo 8º, vale decir, que si un partido con personería que optara por actuar en todos los distritos electorales, en caso de inscribir esa personería en los demás distritos tiene que llenar todos los requisitos a que se refiere el artículo 7º, o si ya de hecho el haber obtenido personería le da derecho para actuar en cada uno de los distritos, tal como en alguna medida lo ha indicado el señor diputado González Bergez.

Si esta aclaración que yo solicito se hiciera en el sentido de que en cada oportunidad hay que llenar los extremos del artículo 7º, nos encontraríamos otra vez con situaciones muy difíciles si en cada distrito se considerara un partido nuevo. Entonces habría que realizar nuevamente todos los procedimientos y posiblemente no podría ir a las elecciones de marzo.

En tal sentido pido una aclaración, y me reservo para hablar nuevamente sobre este particular, si ella no satisficiera mi inquietud.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Musacchio.

Sr. Musacchio. — Nosotros hemos planteado una disidencia parcial en este artículo referida a que en lugar de dos o más distritos fueran ocho o más los requeridos para constituir un partido nacional. Creemos que uno o dos es muy poco. El carácter de un partido nacional demuestra que dos distritos como mínimo es insuficiente a los efectos de constituir lo que, de

acuerdo a la tónica del proyecto, deben ser los grandes partidos nacionales.

Por eso votaremos en contra de este artículo.
Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson. — En el inciso 1º del artículo 8º, donde dice: «El o los partidos...», la comisión acepta suprimir las palabras «el o». De manera que el inciso comienza diciendo: «Los partidos de distrito, etcétera...»

Al final, acepta la observación del señor diputado González Bergez porque, en realidad, se ha deslizado un párrafo que es superabundante. Por lo tanto, admite suprimir al final las palabras «cumpliendo con lo determinado en el artículo 7º».

En cuanto al mecanismo de formación de los partidos, no acepta la observación, en razón de que el que crea este proyecto es muy simple. Se comienza por el partido de distrito. Se constituye el partido de distrito y, si éste desea actuar como partido nacional en dos o más distritos del país, comienza por formarse como partido de distrito y luego, con el reconocimiento, concurre al juez electoral de los otros distritos donde desea actuar —así le contesto al señor diputado Catalán— con todos los requisitos del artículo 7º. Esto debe ser así a los efectos de que los partidos existan auténticamente en todos los distritos; que sean partidos reales y no partidos de sello y almohadilla. De la otra forma, según lo planteaba el señor diputado Catalán, podría ocurrir que un partido haya reunido la voluntad del 0,4 por ciento de los electores del distrito donde se fundó y en los demás distritos sólo exista con su nombre y la inscripción.

Por estas brevísimas consideraciones no aceptamos la modificación total que propone el señor diputado González Bergez y sí las dos que señalé en el inciso 1º.

Con relación a la propuesta del señor diputado Musacchio, el espíritu del proyecto es facilitar la formación de partidos y, desde luego, tal cual lo expliqué al principio, si de entrada, a un partido que nace con vocación de partido nacional en un distrito, y comienza a realizar acción proselitista para constituirse en otros distritos del país, se le establece la obligación de cumplir con todas las condiciones en ocho distritos, se le crea una dificultad excesiva.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado González Bergez.

Sr. González Bergez. — Advierto perfectamente cuál es la mente de la comisión, pero tengo que hacer notar también que no resulta exactamente eso de lo que dice el artículo 8º, que claramente expresa: «Los partidos que resolvieren actuar en dos o más distritos como partidos nacionales deberán solicitar su reconocimiento en tal carácter ante el juez nacional electoral del distrito de su fundación.» El segundo párrafo comienza: «Obtenido tal reconocimiento...» quiere decir que el partido estrictamente de

distrito, que no existe sino en un solo distrito, se presenta al juez electoral del domicilio de su fundación y pide su reconocimiento como partido nacional. Y actúa desde ese momento reconocido como partido nacional, aunque se desempeñe en un solo distrito. Esto surge claro del artículo 8º.

En consecuencia, pueden darse, aunque actúe en un solo distrito, dos órdenes de autoridades, lo que significa dos autoridades, con notorias ventajas patrimoniales, entre otras cosas. Si la mente de la comisión ha sido la que acaba de exponer el señor diputado Belgrano Rawson, creo que lo conveniente es darle al artículo otra redacción, dado que no es imposible encontrar en castellano las palabras que expresen lo que se quiere decir. Por eso he propuesto la redacción del artículo 9º de mi disidencia.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pizarro.

Sr. Pizarro. — Deseo apoyar la indicación del señor diputado Musacchio.

Nosotros tenemos en la página 2358 del despacho una disidencia, donde establecemos que para ser partido nacional hacen falta doce distritos. Como una forma de llegar a solución armónica estimamos exacta la indicación de ocho distritos. Espero que la comisión desistirá de su postura y aceptará la de ocho distritos, que es el número más que justo para que los partidos con aspiración y vocación nacionales puedan constituirse en el país.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Catalán.

Sr. Catalán. — Desearía que la comisión aclarara este otro concepto: si los partidos considerados preexistentes, según artículos 86 y 87 del Estatuto de los Partidos Políticos, deben también, al inscribirse en los distintos distritos, ajustarse al artículo 8º, o si el mismo se relaciona con aquellos partidos nuevos que deban realizar todo lo que concierne a las disposiciones de este estatuto.

En este punto radica la observación fundamental que hago y la aclaración que en definitiva deseo que quede bien sentada. De otra manera nos encontraríamos con que un partido preexistente, que ya se halla legalizado y que quiere inscribirse en los distintos distritos electorales, al hacerlo se encuentra con que no es preexistente porque tendría que llenar todos los requisitos establecidos en el artículo 8º.

En lo que respecta al partido que represento esto le crearía dificultades tremendas, que lo llevarían, posiblemente, a no poder concurrir en algunos distritos, en las próximas elecciones. Por eso pido que esto se aclare, sobre todo cuando se ha dicho que este estatuto tiende a que no haya absolutamente ninguna proscripción, que tiene una vocación a iguales derechos y una finalidad de normalización institucional y política del país.

Sr. Bobillo. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Catalán. — Sí, señor diputado.

Sr. Bobillo. — Quiero señalar, señor diputado, que los partidos nacionales, cuando actúan en las elecciones de distrito para elegir autoridades nacionales, como podría ser el caso de la elección de un diputado nacional que fuera necesario reemplazar, o por cualquier otro motivo, actúan como partidos de distrito, a pesar de ser partidos nacionales. Es decir, que el partido nacional tiene una doble personalidad: como partido nacional y como partido de distrito, cuando actúa en elecciones de distrito.

Sr. Catalán. — Yo me he referido a las facultades que confiere el Estatuto de los Partidos Políticos a los partidos preexistentes de acuerdo a los artículos 86 y 87. Entonces deseo que se aclare que este artículo 8º en ningún momento toca esa circunstancia, vale decir ni al artículo 86 ni al 87.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson. — Invito al señor diputado Catalán a leer el artículo 86 con detenimiento, porque en él está la respuesta a su pregunta, en la que viene insistiendo desde ayer reiteradamente en la comisión. Comprendo que le preocupe el problema, pero el artículo 86 le da la contestación.

Ahora bien, el estatuto establece una diferencia bien clara entre los partidos preexistentes y los que se creen después de sancionada la ley.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Muñiz.

Sr. Muñiz. — Solicito de la comisión tenga la gentileza, por intermedio de su miembro informante, diputado Belgrano Rawson, de repetir el texto del artículo, pues no entendí bien cómo queda con el agregado propuesto por el señor diputado González Bergez.

Sr. Belgrano Rawson. — Se trata de una supresión, señor diputado, la de la última frase del inciso 1º del artículo 8º cuando dice «cumpliendo con lo determinado en el artículo 7º». Hemos aceptado la supresión, porque se ha deslizado ese error. Es evidente que si comenzamos diciendo «el o los partidos de distrito reconocidos», es que ya tienen cumplidos todos los requisitos del artículo 7º. No hay necesidad de repetir.

Sr. Muñiz. — La posición de la comisión es muy clara y traduce con toda exactitud, a través de las expresiones que acabamos de escuchar, el espíritu de la comisión acerca de un problema tratado en ella con todo detenimiento y, como lo ha señalado el diputado Belgrano Rawson, para el caso a que se refirió el señor diputado Catalán juega el artículo 86. Vale decir que hay que tener en cuenta los dos artículos.

De esta manera, siendo el asunto muy claro, nuestro bloque va a votar por el despacho de la comisión con la supresión sugerida por el señor diputado González Bergez y que aquélla ha aceptado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a llamar para votar.

—Se llama para votar.

—Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Mor Roig). — Por Secretaría se va a pasar lista.

—Se pasa lista.

—Mientras se pasa lista.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En este momento hay quórum estricto, señores diputados.

Se va a votar el artículo 8º del despacho de la comisión, con la supresión del final de la primera parte.

Sr. Catalán. — Con la interpretación de que este artículo 8º rige sólo para los partidos nuevos, nuestro bloque votará por la afirmativa.

—Resultado afirmativa de 87 votos; votan 99 señores diputados.

Sr. Alfonsín. — Pido la palabra para una indicación.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Alfonsín.

Sr. Alfonsín. — Es evidente que el tiempo que va demandando esta votación en particular es demasiado extenso, por cuanto ya se han efectuado prolijos estudios, a través de muchos meses, en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

En la oportunidad en que la Comisión de Labor Parlamentaria se reunió para buscar una manera útil de propiciar a la Honorable Cámara la realización de esta votación en particular, en principio se había quedado de acuerdo en conceder la palabra a los bloques, por turno, y éstos tendrían ocasión de formular todas las observaciones que tuviesen con respecto al dictamen, pasando luego a votarse, sin discusiones, el articulado de la ley. No obstante, la comisión creyó conveniente, en cambio, comenzar directamente a votar artículo por artículo.

Podemos encontrar una solución intermedia que, al mismo tiempo que permita a todos los bloques precisar con claridad las observaciones que quieran puntualizar, ha de agilizar, sin duda alguna, la labor de la Honorable Cámara. En este sentido propongo que se vote el despacho que consideramos por títulos, realizando los bloques las observaciones correspondientes —en una sola oportunidad— al articulado comprendido en cada título. Este es el sentido de mi moción concreta.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Serú García.

Sr. Serú García. — Solamente para que por Presidencia se aclare si, de acuerdo con el reglamento, el procedimiento propuesto es viable, puesto que, en su caso, tendríamos que apartarnos de aquél.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Reglamentariamente, la votación debe hacerse artículo por artículo; salvo que, por aplicación del inciso 10 del artículo 108, la Honorable Cámara resolviera apartarse del reglamento.

Sr. Serú García. — Esa es la moción que formulo, señor presidente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar la moción de orden formulada por el señor diputado Serú García en el sentido de apartarse del reglamento para la consideración de este asunto, a fin de posibilitar la adopción de otro procedimiento más ágil para la sanción en particular.

Sr. Pizarro. — Pido la palabra para referirme a la indicación.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pizarro.

Sr. Pizarro. — La razón de tiempo invocada no la encuentro suficiente para que nos apartemos del reglamento. Este estatuto es una ley de gran importancia. Es cierto que ha sido estudiado en la comisión, pero las discrepancias señalan que aquel estudio no fue todo lo que en definitiva debió ser.

Apartarse del reglamento...

Sr. Alfonsín. — ¿Me permite, señor diputado?

Sr. Pizarro. — Sí, señor diputado.

Sr. Alfonsín. — Señor presidente: yo pienso que de ningún modo se perjudica la tarea que pueda realizar la Honorable Cámara, por cuanto el hecho de que se vote por capítulos no significa en manera alguna que se impida la discusión de cada artículo en el momento de ponerse a consideración el capítulo correspondiente. De modo que éste no es más que un método práctico para realizar la discusión, sin necesidad de estar votando continuamente e interrumpiendo la tarea. En forma alguna pretendemos coartar la libertad de todos los señores diputados para hacer uso de la palabra y formular todas las observaciones que crean pertinentes. Es, simplemente, la única forma que encuentro de agilizar la consideración en particular de este dictamen, pero repito que ello no significa que los bloques no puedan hacer las observaciones que estimen convenientes.

Sr. Pizarro. — Continúo, señor presidente.

El grupo legislativo demócrata cristiano va a oponerse a que la Honorable Cámara se aparte del reglamento, porque ésta no es una vía de uso común, sino para casos excepcionales en que se puede justificar. Hacerlo en este caso sería desvirtuar el procedimiento que hemos venido siguiendo.

En consecuencia, nuestro voto será por la negativa con respecto a la indicación de apartarse del reglamento.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Martínez Raymonda.

Sr. Martínez Raymonda. — Voy a formular una sugerencia referente a la moción del señor

diputado Alfonsín, que tal vez concilie las distintas opiniones expuestas.

Sugiero que los distintos bloques formulen las objeciones por títulos, pero que la votación se haga consecutivamente sobre todos los artículos de cada título. Esto permitirá que el trazar del quórum se pueda aligerar cuando, ya terminada la discusión de un título, se voten de corrido todos los artículos incluidos en él.

Además, esto no obligaría a apartarnos del reglamento.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Ferreira.

Sr. Ferreira. — Nuestro bloque se va a oponer a la moción de apartarse del reglamento en la consideración en particular del dictamen sobre estatuto de los partidos políticos.

Sr. Serú García. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Ferreira. — Sí, señor diputado.

Sr. Serú García. — Frente a la sugerencia del señor diputado Martínez Raymonda retiro la moción que he formulado y acepto su indicación de discutir por títulos, votando luego los artículos contenidos en cada uno de ellos.

Sr. Alfonsín. — Si me permiten, quiero decir que aceptamos la indicación del señor diputado Martínez Raymonda.

Sr. Ferreira. — Bien, señor presidente. Estamos entonces dentro del reglamento. Hay que cumplirlo. Yo considero que la moción, o sugerencia, como la ha llamado el señor diputado Martínez Raymonda, puede ser aceptada como un acto de voluntad, no sólo de los bloques, sino de todos los señores diputados, para tratar de abreviar la discusión, pero que de ninguna manera esta sugerencia importa apartarse del reglamento. Vale decir que voluntariamente los bloques omitirán reproducir o multiplicar sus observaciones por vía de sus respectivos miembros cuando se consideran oficiosas o sobreabundantes. Pero nuestro bloque se opone a que se deje el precedente de apartarse del reglamento en la discusión de esta importante ley, discusión que aunque minuciosa a mí no me asusta, y que, por el contrario, la creo saludable, porque estamos ante un instrumento fundamental para la vida y para la muerte de los partidos políticos argentinos.

Sr. Pizarro. — Exactamente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿Habría asentimiento de la Honorable Cámara para interpretar como un acuerdo tácito de voluntades el procedimiento sugerido?

¿El señor diputado Serú García mantiene la moción de apartarse del reglamento?

Sr. Serú García. — De acuerdo con lo manifestado por los señores diputados que me han precedido en el uso de la palabra, la indicación del señor diputado Martínez Raymonda no significa apartarse del reglamento, puesto que la Cámara votará de todas maneras artículo por artículo. De modo que yo entiendo que no es

necesario que mantenga la moción que he formulado, que, por lo tanto, retiro, puesto que la Presidencia podrá poner a consideración el capítulo pertinente, los diputados podrán hacer uso de la palabra sobre los artículos que integran ese capítulo, y posteriormente votarán estos artículos por su orden.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Por Secretaría se va a dar lectura al artículo 142 del reglamento.

Sr. Secretario (Oliver). — «Artículo 142. La discusión en particular se hará en detalle, artículo por artículo, o período por período, debiendo recaer sucesivamente votación sobre cada uno.»

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Alfonsín.

Sr. Alfonsín. — Me parece que la interpretación que ha dado la Presidencia a las palabras del señor diputado Martínez Raymonda, después de la intervención del señor diputado Ferreira, es la adecuada. Se trata, evidentemente, de un acuerdo tácito que realizan los bloques a fin de posibilitar la discusión en la forma indicada por el señor diputado Martínez Raymonda.

Creo que debemos entrar a la consideración de los artículos en la forma indicada, tratando de que en la medida de lo posible los señores diputados respeten este acuerdo que la Cámara, por la palabra de los representantes de los bloques, ha aceptado.

Sr. Ferreira. — Es un acuerdo informal.

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿Hay asentimiento para adoptar el procedimiento propuesto por el señor diputado Martínez Raymonda?

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Corresponde considerar lo que resta del capítulo I del título II.

Tiene la palabra el señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson. — La comisión ha recogido observaciones con respecto al artículo 12. Se suprime el último párrafo y algunas otras palabras, de modo que quedaría redactado de la siguiente manera: «Los partidos confederados tienen el derecho de secesión y podrán denunciar el acuerdo que los confedera...» A continuación se suprime la frase «en cambio» y continúa el artículo: «Sus organismos centrales carecen de derechos de intervención.» Se suprime la frase final, que dice «...salvo disposición estatutaria en contrario.»

Con relación al artículo 13, se suprime la mención de partidos confederados, de manera que quedaría de la siguiente manera: «Esta ley se aplica a los partidos que resulten de dos o más partidos nacionales o de distrito, va reconocidos.» Y sigue el segundo párrafo, sin modificaciones.

Con respecto al artículo 14, relativo a alianzas, se modifica el texto propuesto por la comisión en

su despacho original, con lo cual se ha obtenido la adhesión de los diputados que la integran en representación de la Unión Cívica Radical del Pueblo. La redacción que reemplaza a la original es la siguiente: «Artículo 14. Inciso 1) Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, los partidos de distrito o nacionales y las confederaciones que hubieran sido reconocidas podrán concertar alianzas transitorias con motivo de una determinada elección, siempre que sus respectivas cartas orgánicas lo autoricen. Inciso 2) El reconocimiento de las alianzas deberá ser solicitado por los partidos que las integrasen por lo menos dos meses antes de la elección al juez nacional electoral del lugar del domicilio de cualquiera de ellos, cumpliendo —no cumplimentando— los siguientes requisitos: a) La constancia de que la alianza fue resuelta por los organismos deliberativos máximos partidarios, en reunión convocada especialmente al efecto y por el voto de las dos terceras partes de sus miembros en ejercicio.» Los incisos b) y c) quedan sin modificación. El inciso d) comienza «Constancia de la forma acordada para la integración», y sigue tal cual está. El inciso e) queda sin modificación.

En cuanto al artículo 15, se produce una pequeña modificación al suprimirse la palabra «fusionados», de manera que quedaría: «Los partidos de distrito, nacionales o confederados deberán solicitar...»

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Ferreira.

Sr. Ferreira. — A raíz de las modificaciones que ha enunciado el señor diputado presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, advierto que para nosotros es prácticamente imposible conocer en forma precisa las modificaciones admitidas por la comisión y formarnos un juicio acabado sobre las alteraciones que ha sufrido el primitivo despacho.

Sr. Belgrano Rawson. — Puedo aclarar las modificaciones rápidamente.

Sr. Ferreira. — Más que una aclaración, señor diputado, yo desearía el texto literal de las modificaciones.

Sr. Belgrano Rawson. — Señor diputado: le hago llegar el texto escrito del artículo 14, que es la modificación más importante.

Sr. Ferreira. — No hago un pedido personal, porque las mismas inquietudes las han de tener todos los señores diputados a fin de apreciar a conciencia las modificaciones que se han introducido al dictamen originario de la comisión.

Yo le agradezco al señor diputado, de todos modos, su gentileza.

Sr. Belgrano Rawson. — Si me permite dos palabras para aclarar...

Le he hecho llegar, señor diputado, el texto del artículo 14, con la modificación aceptada por la comisión, y le aclaro que en el artículo 12 la comisión ha aceptado suprimir —con relación al derecho de intervención en partidos

confederados— la última parte: «salvo disposición estatutaria en contrario», por haber advertido que es de la esencia de la confederación la carencia en organismos centrales del derecho de intervención a los distritos que forman la confederación.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pizarro.

Sr. Pizarro. — Señor presidente: apenas iniciamos este nuevo sistema de votar por capítulos nos encontramos con que se vuelve difícil para los diputados el retener modificaciones introducidas al despacho de la comisión, de las que no disponemos copia. Yo comprendo que esa tarea se hace difícil; hay legisladores que han venido a las diez de la mañana a esta casa y que aún no se han retirado de ella, cumpliendo con su deber. La fatiga contribuye, en parte, a que no podamos retener las diversas modificaciones, algunas de las cuales carecen de toda importancia, de toda trascendencia, aunque hay algunas otras de las que no puedo decir lo mismo. El grupo legislativo de la democracia cristiana va a votar este capítulo tal cual fue redactado originariamente por la comisión.

En lo que respecta al problema de las alianzas, no puede aceptar que deban ser dispuestas por los dos tercios de los miembros en ejercicio de los organismos deliberativos; es una exigencia demasiado severa y que no se ajusta a la realidad que vivimos. Sería mucho más aceptable que esos dos tercios fueran de los presentes en el momento de tomarse la decisión.

En el afán de ser gráfico he de intentar convencer a la comisión exponiendo el ejemplo de esta Cámara, que integrada por 185 diputados en la actualidad, a veces, como ahora, delibera con 100 y resuelve, con 51 votos de los 185, cosas importantes, como esta misma ley que va a regir la vida de los partidos políticos.

Entonces, por la experiencia que tenemos, no debemos establecer exigencias tales que hicieran imposibles las alianzas de los partidos políticos. Comprendo e interpreto la vocación y la tradición de ponderables fuerzas políticas que a través de su historia han sido enemigas de las alianzas. Que no las hagan, que continúen manteniendo una tradición a la que dicen ser fieles, pero que no impidan que las realicen otras fuerzas políticas que viven a tono con la dinámica del mundo, convencidas de que las alianzas de los partidos son indispensables para realizar desde el cogobierno los programas mínimos, que han convenido.

Por eso defendemos con cierto acaloramiento el principio de las alianzas, y creo que no se las debe dificultar, dejándolas libradas al acuerdo de los hombres, hechas a la luz del día, con programas bien concretos, para servir los intereses de la comunidad argentina.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado García.

Sr. García. — Aclaro que en este instante no hablo en nombre de la comisión.

Quiero expresarle al señor diputado Pizarro que cuando nosotros nos hemos pronunciado en el seno de la comisión en contra de las alianzas no fue porque quisiéramos imponer nuestro estilo partidario a los demás, porque ello sería una intromisión indebida, que de ninguna manera estaría justificada en un partido que actúa con seriedad. Lo que hemos querido significar es que entendemos que las alianzas desdibujan la personalidad, el perfil, la fortaleza y la esencia de los partidos políticos y, en consecuencia, es una entidad que no contribuye al desarrollo feliz de nuestra vida pública. Por eso tratamos de suprimirla.

Como éste es un despacho obtenido a través del criterio conciliatorio de todos los sectores políticos representados en la comisión, allí nos hemos allanado a declinar, precisamente a favor de esa posibilidad, el principio de la supresión de las alianzas, que lo creemos firmemente necesario, para aceptarlo, pero disponiendo el cumplimiento de dos recaudos que expresan un criterio restrictivo en cuanto a la posibilidad de formalizar alianzas. El despacho traduce ese juicio conciliatorio.

Sr. Pizarro. — Le agradezco la aclaración, pero me quedo con el ejemplo de la historia contemporánea en Europa y en América.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Musacchio.

Sr. Musacchio. — Quiero aclarar que respecto del título que en este momento estamos considerando, nuestra discrepancia está planteada en el artículo 14, al que se está haciendo referencia.

Cuando se consideró en general el despacho hemos escuchado encendidos discursos a favor y en contra de las alianzas. Uno de ellos, en contra de las mismas, fue el que en su oportunidad pronunció el señor diputado García exponiendo, de acuerdo con su opinión, todos los inconvenientes y defectos que podrían traer las alianzas para la democracia argentina; pero resulta que con un criterio conciliador se reforma, aparentemente en forma parcial, el artículo, exigiéndose los dos tercios de votos de los organismos deliberativos, proviniendo justamente esa propuesta del bloque del radicalismo de pueblo, al que pertenece el señor diputado García. Vale decir que los fundamentos que él expuso lealmente, de acuerdo con su pensamiento, los trasladados con una exigencia de tal tipo a los organismos deliberativos de los partidos, lo que prácticamente hace imposible la realización de las alianzas.

Como este artículo exigía una plataforma electoral común que garantizaba la decencia de la alianza en coincidencia con el pensamiento de fondo y con anticipación de dos meses a la realización de los comicios, para que la ciudadanía no fuera engañada, así como estaba redactado el texto por la comisión, nosotros lo apoyamos,

porque considerábamos que estaban dadas todas las garantías y excluidos todos los temores expuestos por el señor diputado García. Pero la reforma propuesta desfigura de tal manera el sentido original que hace imposible la realización de las alianzas.

Apoyo, pues, los argumentos dados por el señor diputado Pizarro y anuncio que votaremos en contra de este artículo y que sostendremos el originario del despacho mayoritario.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Domínguez.

Sr. Domínguez. — Voy a proponer a la comisión una modificación de forma al artículo 14 para adaptarlo mejor a lo que debe ser. Yo propondría que dijera lo siguiente: «El reconocimiento de la alianza deberá ser solicitado por los partidos que la integran al juez nacional electoral del lugar del domicilio de cualquiera de ellos por lo menos dos meses antes de la elección cumplimentando los siguientes requisitos...»

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Sandler.

Sr. Sandler. — Dentro del capítulo que estamos considerando motiva nuestra preocupación este requisito impuesto en el apartado a) del inciso 2º del artículo 14. Estimamos que la polarización de las fuerzas cívicas dentro del país es una realidad, y en este sentido el sistema proporcional constituye una ventaja notable para permitir la expresión de estas fuerzas políticas. Pero de esto no se concluye la conveniencia de la excesiva polarización.

Quizá sea conveniente al país que paulatinamente las fuerzas cívicas se reagrupen, y en este sentido el estatuto debe tratar de no interferir estas primeras aproximaciones, estos contactos, sobre todo cuando se hacen sobre bases éticas y morales claras como, por ejemplo, establecer una plataforma electoral común.

De manera que la interferencia de este cuerpo al establecer las condiciones en cuanto a la cantidad de votos que deben reunir las asambleas que establezcan las alianzas nos parecen excesivas y van más allá de lo que al país conviene.

Por estos motivos y por las razones dadas por los diputados preopinantes en favor de nuestra posición, vamos a votar en contra de lo propuesto en este momento por la comisión, o sea, en favor del despacho originario.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Muniagurria.

Sr. Muniagurria. — Por consideración a la Honorable Cámara no voy a reiterar los argumentos que me tocó expresar cuando se debatió el proyecto en general a favor de las alianzas. Quiero anticipar solamente nuestro voto en contra de la propuesta que acaba de formular la comisión, y que apoyamos, en cambio, el proyecto primitivo.

Las exigencias establecidas en el proyecto modificado por la comisión hacen —como ya se ha dicho— ilusoria, en la realidad de los hechos, la posibilidad de concertar alianzas. Desde nuestro punto de vista las alianzas constituyen una expresión de civilización política adecuada a la realidad política argentina. No es un problema de moral política; es un problema de conducción política que atañe única y exclusivamente a las autoridades y a los responsables de esa conducción en cada uno de los partidos. En consecuencia, en este aspecto apareceríamos alentando un espíritu intervencionista del estatuto y su penetración en la vida interna de los partidos. No hay por qué determinar por medio de esas normas reguladoras de la actuación de los partidos políticos, dificultades que puedan hacer imposible, en la realidad de los hechos, las alianzas electorales.

Consideramos que la redacción primitiva es la adecuada. Tomemos algunos recaudos, algunos requisitos como base indispensable para que los partidos políticos, por el órgano de sus autoridades, puedan decidir libremente la oportunidad o la conveniencia de la realización de esas alianzas.

Por último, si aceptamos que la abstención es también un derecho que atañe a los partidos, debemos reconocer que la realización de las alianzas atañe solamente a los partidos, y la intervención que emerge de un estatuto como el actual que estamos proyectando no tiene por qué limitar y llegar a cancelar la posibilidad de ejercicio de esos derechos políticos.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Jofré.

Sr. Jofré. — Nuestro bloque, cuando tuve oportunidad de hablar en su nombre en la discusión en particular, hizo presente que era partidario de las alianzas, pero creemos que no se debe dejar en libertad a los partidos para que las hagan como crean conveniente, siempre que actúen con la debida publicidad y la anticipación necesaria. Señalé en esa oportunidad algunos inconvenientes y que se debían tomar algunas precauciones. Por eso es conveniente que se establezca con precisión absoluta en el estatuto, cómo deben realizarse.

Por esas razones, nuestro bloque va a votar el despacho originario de la comisión.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Ferreira.

Sr. Ferreira. — Nuestro bloque va a votar en contra del precepto enunciado en su nueva redacción por el señor presidente de la Comisión de Negocios Constitucionales, porque virtualmente anula la posibilidad de las alianzas de los partidos políticos que son procedimientos idóneos y lícitos en la vida política nacional. Creo que canalizar la coincidencia de las agrupaciones políticas mediante las alianzas es una conducta constructiva, democrática y republi-

na, y de ninguna manera pueden admitirse cláusulas restrictivas que la anulen o las hagan difíciles, casi imposibles por vía de una legislación como esta que se quiere sancionar y que aconseja la mayoría de la comisión.

Nosotros le hemos imputado al despacho de la comisión un exceso de intervencionismo y de reglamentarismo, porque sabemos que esos avances en materia política conducen a introducir cláusulas y preceptos proscriptivos, prohibitivos o cercenadores de la libre, espontánea y democrática actividad de los partidos políticos.

Quiero señalar que, incluso, y con mayor razón en un régimen de proporcionalidad, las alianzas son, si se quiere, el medio más apto y franco para corporizar una voluntad mayoritaria en determinado momento en el país. Por vía de estas reformas que nos aconseja la comisión se está cercenando, precisamente, esa posibilidad que se ofrece a los partidos políticos a la propia ciudadanía. Pero, ¿qué ocurre? Se está criticando a las alianzas y sucede que se quieren evitar o reglamentar al máximo las pre-electorales, pero después se cae en las alianzas poscomiciales, en las asambleas legislativas o de electores, para presidente y vice o gobernador y vice para lo cual el proyecto no habla nada. ¿Por qué se extrema el celo intervencionista y reglamentarista para el caso de las alianzas preelectorales, que al final, las juzga el pueblo soberano, y no se dice una palabra sobre los acuerdos poselectorales que se hacen en los cenáculos de políticos sin votos y a espaldas del pueblo?

Dejo así fundamentada brevemente nuestra posición en contra del dictamen de la mayoría que votaremos por la negativa.

Sr. Presidente (Mor Roig).— Tiene la palabra el señor diputado Sarrulle.

Sr. Sarrulle.— Por las razones dadas por los distintos bloques en apoyo del despacho primitivo de la comisión, argumentos que también sostenemos nosotros, el bloque justicialista va a votar el despacho originario.

Sr. Presidente (Mor Roig).— Tiene la palabra el señor diputado Solari.

Sr. Solari (J. A.).— Si hay un partido en la política argentina, señor presidente, que en las últimas décadas ha concertado alianzas con fines defensivos de la democracia del país y para afirmar sus instituciones representativas, ha sido, sin duda alguna, el partido a que pertenezco. Desde 1931, en que se formalizó la alianza demócrata progresista-socialista, con la fórmula de la Torre-Repetto; después de las gestiones del año 1937 del mismo doctor Repetto ante la Unión Cívica Radical, entonces presidida por el doctor Alvear, para llegar a un entendimiento de las fuerzas democráticas argentinas contra el fraude, la violencia y la venalidad, en el año 1946 contribuimos decisivamente a la Unión Democrática y votamos, dejando de lado algunas ocupaciones que nos parecían atendibles y

serias, la fórmula que proclamó la convención radical, integrada por los doctores Tamborini y Mosca. Finalmente, dando lo que nosotros consideramos un ejemplo de educación política y de desinterés, en las elecciones pasadas, del 7 de julio, nuestro partido se decidió a votar una fórmula extrapartidaria, integrada por el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Orgaz, y el señor Rodolfo Fitte.

Es que nos viene de muy lejos, del nacimiento del partido, esta preocupación por contribuir de alguna manera a sacar al país de estos períodos de estancamiento en que se debate más o menos cíclicamente. Tengo presente que el doctor Justo, fundador de nuestro partido, redactor de sus estatutos, declaración de principios, y programa, en el año 1896 propuso un artículo, que él mismo decía que fue un poco una jactancia teórica de su parte, según el cual el Partido Socialista podía realizar alianzas con otros partidos, siempre que aceptaran la integridad de su programa.

Esa proposición fue rechazada por el congreso y, entre los que se opusieron más enérgicamente, figuraron algunos hombres que hoy recordamos con viva simpatía por su aporte a la vida intelectual argentina, como Ingenieros y Lugones, que tuvieron un paso muy fugaz por la vida partidaria; pero encontró el apoyo de otros hombres vinculados al movimiento obrero y socialista argentino, y de algunos intelectuales no menos notables, como Roberto Payró.

Esa idea fue madurando en el seno de nuestro partido, la idea de no desentendernos de la posibilidad de colaborar limpia, generosa y públicamente para realizar objetivos en función del interés permanente de la colectividad y de contribuir también a la solución de los grandes problemas que afectan a todos, sin distinción de rótulos banderizos ni de sellos de partidos.

No voy a hacer la historia —porque me hago cargo de la situación de esta Cámara y no quiero abusar de la paciencia de los señores diputados— de esta preocupación por la idea de la alianza, de la fusión, de la coalición en la actividad de nuestro partido, pero sí quiero decir que finalmente eso se incorporó a los estatutos, en cuyo artículo 90 se dispone que el congreso nacional del partido, integrado por los delegados de los centros respectivos de todo el país o, en caso de urgencia, el consejo nacional de la agrupación, en el que están representados los delegados de las distintas federaciones, puede resolver por los dos tercios de votos de sus miembros la concertación de una alianza.

De modo que no nos toma de sorpresa la proposición que nos llega de la comisión que ha estudiado este asunto. Aspiro a que las otras agrupaciones, si tienen en su espíritu gravitando la idea de contribuir a mejorar nuestra situación política y de colaborar en una obra que debe demandar el esfuerzo de todos para bien del país, esa aspiración esté precedida por la preocupación de servir al país y no a bandos, facciones o personas, y menos de servir de vehículo

para intereses que no siempre pueden confesarse, de mero predominio político electoral, de auge circunstancial, por vías no siempre conocidas, de apetitos de predominio de poder por el poder mismo. Alianzas —repito lo que dije ayer— que no sean tratos pampas ni trapicheos de comité; alianzas que sean conocidas por la opinión con la anticipación necesaria, discutidas, debatidas y aprobadas en las asambleas de los partidos, con la intervención de los hombres que tienen la dirección y el trabajo inmediato y, desde luego, a la luz de un programa que sea el vínculo de unión para un esfuerzo en un momento dado, que permita afrontarlo en común, levantando una sola bandera, sin que ninguno de los partidos pierda su individualidad.

Este es el sentido de nuestro voto afirmativo para la proposición de la comisión. Deseo expresar mi anhelo honrado y sincero de ver a las fuerzas afines que se mueven en el escenario político argentino dispuestas a colaborar, desde su ángulo de acción, con fervor, desinterés y patriotismo —ésta es una palabra un poco desteñida y desgastada, pero la empleo desde la intimidad de mi conciencia—, a interpretar los intereses fundamentales de la República con un criterio de renovación y no de estancamiento o retroceso.

La democracia no puede permanecer indiferente. Hoy se ha hablado de la Constitución, que no es un cuerpo muerto. Nosotros no somos fetichistas de la ley ni de la Constitución, que puede y debe ser un camino que nos trace el derrotero de nuestro futuro. Está en nuestras manos reformarla. Hemos proyectado reformas completas y aspiramos a tener bastante fuerza, con la colaboración de hombres que coincidan con nuestro punto de vista en lo fundamental para imponer esa reforma, y darle a la República el destino que la República merece en defensa de los ideales de libertad, de respeto de los derechos humanos y de emancipación integral, de redención social, económica, cultural y moral de sus clases laboriosas y fecundas. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Muñiz.

Sr. Muñiz. — Nuestro partido no es ni ha sido nunca enemigo de las alianzas, forma del quehacer político que en un momento determinado pueden ser consecuencia de una necesidad y servir, realmente, a altos y nobles propósitos políticos. Pero si hemos sido y seguimos siendo acérrimos enemigos de esa fórmula de conocido y remoto origen en nuestro medio, con mal nombre y peor fama. Me refiero al acuerdismo, a la inteligencia entre media docena de titulados o reales dirigentes que giran a *piacere* a sus respectivos partidos. Esto último es lo que no aceptamos: lo que repudiamos con vigor.

Por estas razones hemos sostenido siempre y reiteramos ahora que las alianzas no solamente deben elaborarse de tratativas públicas dentro de

los respectivos partidos y para conocimiento de los ciudadanos que no militan en ellos, pero que en el momento de emitir el sufragio deben pronunciarse. Hemos exigido, también, propósitos claros, definidos y confesados de los móviles que determinan la constitución de la alianza y de los objetivos que se persiguen con la misma. Pero, por sobre todo, hemos reclamado que las alianzas sean auténtica expresión de la voluntad partidaria de los respectivos pueblos partidarios que se disponen a concertar la alianza. Por eso, en nuestras disposiciones internas, en la carta orgánica del Partido Socialista Argentino, solamente el congreso extraordinario tiene atribuciones —ningún otro cuerpo directivo puede considerar y pronunciarse sobre alianzas— para resolver sobre el particular, y esto sólo puede acordarlo después de debates previos, en el seno del partido, con la participación de la totalidad de los afiliados. Por último, es necesario el voto favorable de dos tercios de los delegados incorporados al congreso para que la alianza sea aprobada.

Es la fórmula que hemos encontrado mejor, más aconsejable, consecuencia de la experiencia para asegurar las condiciones a que me he referido y, especialmente —lo más importante— que las alianzas no sean el fruto de la inteligencia o de los acuerdos o conversaciones de un mayor o menor número de dirigentes, sino la real, efectiva expresión de la mayoría de los afiliados de cada partido.

Por estos motivos, muy brevemente expuestos, nuestro bloque va a apoyar lo que llamaré el segundo despacho de la comisión, o la fórmula arbitrada en la reunión de anoche.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una aclaración, tiene la palabra el señor diputado Musacchio.

Sr. Musacchio. — Había solicitado una interrupción al señor diputado Muñiz, porque los argumentos que ha dado parecerían significar que de acuerdo con este despacho, una resolución tomada por la mayoría del organismo deliberativo importaría un acuerdo a espaldas de la voluntad mayoritaria.

La diferencia está en que ahora el despacho exige los dos tercios, y el que nosotros sostenemos exige la mayoría simple del organismo deliberativo correspondiente, lo que significa que hay publicidad y de ninguna manera puede interpretarse como un acuerdo a espaldas de los afiliados y del pueblo. Esto es lo que quería decir.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Rouzaut.

Sr. Rouzaut. — Señor presidente: la Comisión de Asuntos Constitucionales se ha hecho eco de algunas observaciones al proyecto tal como estaba redactado, a consecuencia de los simples requisitos que se exigían para hacer estas alianzas accidentales, pues bueno es recordar que el

proyecto establece las categorías de fusiones permanentes y de fusiones o alianzas accidentales.

Linares Quintana, en su obra *Los partidos políticos, instrumentos de gobierno*, dice: «Explícate que un acto de tanta importancia para un partido político, que puede tener como consecuencia hasta la desaparición del mismo, no debe llevarse a cabo sin el consentimiento de la mayoría de los afiliados. Razones de orden ético obligan a no autorizar esas "combinaciones" o "acomodamientos" que conspiran contra la sanidad política, en los cuales está ausente, olvidada o desconocida, la masa partidaria.»

Es por eso que la legislación comparada, e, incluso, los proyectos presentados en nuestro país, han exigido requisitos más severos. Así, el artículo 74 del proyecto de 1944 exigía la aprobación por la mayoría del voto directo de los afiliados; y el artículo 125 de ese proyecto se refiere a las fusiones accidentales de federaciones de partidos. Igual número de votos de los afiliados de los partidos exige la sanción del Honorable Senado del año 1946. Es que, señor presidente, estas precauciones se toman como una garantía para el afiliado.

Aun en el derecho privado, cuando las sociedades anónimas, por ejemplo, entran en fusión con otra sociedad, se da derecho al accionista al receso, es decir, a la posibilidad de separarse, porque cuando ellos entraron a la sociedad perseguían la idea de estar en un ente determinado, y no en un ente fusionado. Con respecto a la fusión accidental en los partidos políticos es indispensable exigir más severos requisitos para realizarla.

No olvidemos que este proyecto sólo exige una plataforma electoral común, es decir, principios que se formulan para cada elección. Ni siquiera se habla de la programática o de los principios fundamentales de los partidos, es decir, aquellos que tienen un carácter más permanente.

Por otra parte, no hay que confundir alianza con la coincidencia que pueden tener los electores en el colegio electoral a los efectos de dar su voto a la persona que resultara más votada por el pueblo.

Por eso, la exigencia del proyecto, tal como ahora se ha redactado, en donde se requiere nada más que una convocatoria especial para una asamblea o para una reunión de los cuerpos deliberativos superiores y en donde se exige el voto de las dos terceras partes de los miembros en ejercicio de esas asambleas, cuando las cargas orgánicas permitan esas fusiones, creemos que son los recaudos mínimos razonables que deben exigir para la fusión de los partidos políticos; de manera que esos requisitos significan verdaderas garantías para los afiliados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a llamar a votar el artículo 99.

Sr. Luco. — ¿Cuántos diputados hay en la casa, señor presidente?

Sr. Presidente (Mor Roig). — Según el último informe, en la casa hay 98 señores diputados.

—Se llama para votar.

Sr. Serú García. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Serú García.

Sr. Serú García. — Voy a sugerir un agregado al artículo 15, artículo que está incluido en el capítulo que consideramos.

El artículo 15 se integra con dos incisos. y propongo la inclusión de un tercer inciso, cuya redacción, de conformidad con el suplemento que obra en poder de los señores diputados, sería la siguiente: «En ningún caso se negará el reconocimiento por hechos anteriores a la vigencia de esta ley.»

Este artículo se refiere en general al reconocimiento de los partidos políticos, y el agregado que proponemos tiende a despejar de manera categórica y expresa cualquier duda que pudieran tener el día de mañana los órganos jurisdiccionales encargados de la aplicación de la norma legal que discutimos.

Reconozco que, conforme a principios conocidos y, casi podría decir, a principios elementales del derecho, se descarta que los jueces no podrán tener en consideración hechos anteriores a la vigencia de esta ley a los fines de sentenciar en los pedidos de personería política. Pero también afirmo que en nuestro país son muchos en los últimos tiempos los principios jurídicos elementales que han sido avasallados, por lo que se hace necesario, entonces, que en defensa de los derechos fundamentales de ponderables sectores políticos de la República agotemos las precauciones para que ningún juez pueda en el futuro obstar el reconocimiento de esos sectores políticos, y que indudablemente podemos determinarlas, como es el caso del Partido Justicialista.

Aquí sí que cabe la aplicación de otro antiguo principio usado en derecho, muy conocido por los intérpretes de la ley; aquel que dice que lo que abunda no daña. Nunca más ajustado a la realidad que con respecto a la invocación que en este instante formulo.

Yo solicito que en homenaje a lo mucho que se ha dicho por parte de casi todos los sectores políticos a favor de la necesidad de que miremos hacia el futuro y dejemos atrás el pasado común de todos los argentinos, sancionemos este inciso que proponemos agregar al artículo 15, porque él constituye la expresión gráfica y jurídica de esa intención de correr un telón sobre ese pasado. Ninguna prescripción de la ley que estamos sancionando reflejaría con más cabal fidelidad el pensamiento que al respecto tienen casi todos los sectores y, particularmente —permítaseme que lo cite en este instante—, del señor presidente de la República.

No creo que sean atendibles las objeciones que se han formulado en el seno de la comisión. Tan poco atendibles son, a mi juicio, que a poco que discutimos en la comisión este problema, muchos de los señores diputados inspirados en una posición doctrinaria distinta que los hacía oponerse en principio a lo que yo proponía, fueron cambiando de opinión, y llegó un momento en que se resolvió postergar la consideración de este agregado a los efectos de tratarlo en los últimos momentos en que la comisión estuviera reunida. Por una razón de hecho, la comisión no llegó a expedirse sobre el particular, y esta circunstancia me ha obligado a formular este pedido en el recinto.

Dije que las razones que en la comisión se habían invocado para oponerse a la inclusión que ahora solicito no tuvieron fuerza de convicción suficiente. Se afirmó, por ejemplo, que el agregado solicitado violaba, en principio, normas de técnica jurídica. Señalo que el estatuto que estamos construyendo está muy lejos de ser un modelo de técnica jurídica. Vale más llevar tranquilidad a amplios sectores políticos de la República, que preocuparse con afán académico de respetar las normas impuestas por la técnica jurídica. Vale más llevar la sensación real y cabal de que no se va a invocar en lo sucesivo el pasado para cerrar en el futuro el camino de los comicios a las amplias mayorías populares, que quedar bien con la academia del derecho. Por eso digo que ese argumento no tiene suficiente fuerza de convicción.

Se me dice también que el problema puede quedar resuelto con una aclaración en el recinto. Yo afirmo que si hay buena voluntad y si no existe ninguna discrepancia, pues hasta este momento no se han presentado, por lo menos en el debate en comisión, contra la sustancia de lo que propongo, sino solamente contra la forma, se puede incluir el agregado que proponemos. Porque puede ocurrir que algún juez no tenga a mano el Diario de Sesiones, pero sí el Boletín Oficial; y, aun cuando lo tuviese, es mucho lo escrito en materia de hermenéutica jurídica para que pueda yo afirmar con serios fundamentos que la opinión del legislador no hace ley. Y es más, me animaría a decir que las más modernas escuelas de derecho lo niegan de manera categórica. De suerte tal, que podemos nosotros quedarnos con nuestras buenas intenciones, y el juez con el texto de la ley, que no las aclara suficientemente. Entonces, asociando el artículo 15 con otras disposiciones que campean a lo largo de la norma legal que estamos debatiendo, puede obstaculizarse el camino de los comicios a algunos sectores de la opinión ciudadana.

Estas prevenciones que me animan tienen también algún fundamento jurisprudencial. Ya algún juez de la República, en un momento ciertamente oscuro de la vida cívica de los ar-

gentinos, atenta la personalidad de los promotores de un partido político, los individualizó —por así decir— señalándolos con el índice de su supuesta justicia y dijo: éstos son los mismos que antes pertenecían a otro partido totalitario y no pueden constituir este nuevo partido. Es decir, que las proscripciones e inhabilitaciones que abarcaban a determinadas tendencias del pensamiento —y digo abarcaban porque creo que la legislación represiva ha sido definitivamente erradicada del ordenamiento jurídico argentino—, según el criterio de ese juez de Córdoba seguían a las personas como si fueran un atributo humano. Tenemos que luchar definitivamente contra esa posibilidad.

Si aquí hay buena fe, si se quiere dar la impresión cabal —como pareciera ser la opinión del señor presidente de la República— de que hay que superar un pasado que puede entorpecernos a todos, y no me refiero a una época determinada, sino a todo el pasado argentino, yo reclamo de la Honorable Cámara el voto afirmativo del agregado que proponiamos.

Sr. Garófalo. — ¡Ni el bombo, ni la marcha!

Sr. Pedrini. — ¡Ese es todo el problema para el señor diputado!

Sr. Lucio. — Es parte de la liturgia.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Llaver.

Sr. Llaver. — Señor presidente: la proposición que formula el bloque justicialista resulta total y manifiestamente innecesaria, desde el momento que en el artículo 15 se está tratando del reconocimiento de los partidos nuevos y del requisito que éstos tienen que cumplir para obtener su personería jurídica y política. En este caso basta con el cumplimiento de las disposiciones formales contenidas en el cuerpo del estatuto que estamos tratando, sin que puedan entrar a jugar en la decisión de la justicia ninguna clase de hechos, ni presentes ni pasados. Sólo jugarán los hechos para el futuro, cuando de acuerdo con las disposiciones que contiene el proyecto, los actos de realización, es decir, no sólo los actos formales de postulación, sino los reales de actuación, demuestren una voluntad del partido de contrariar las disposiciones doctrinarias básicas y fundamentales previstas en defensa de la democracia.

Quiere decir, entonces, que en ningún caso los jueces, en situaciones como la presente, pueden entrar a juzgar hechos. Ante tal circunstancia no aparece visible la razón de preocupación, más aún, la exaltación del señor diputado preopinante, que pareciera temer que los hechos pasados a que se ha referido importaran una confesión de que los mismos han estado en contradicción con los principios democráticos y republicanos del país.

Sr. Serú García. — No se lo acepto.

Sr. Lucio. — De ninguna manera.

Sr. García. — ¿Qué es lo que no acepta?

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Llaver. — Si el señor diputado no lo acepto, me va a obligar a tener que puntualizar que, no sólo en lo institucional sino también en lo ético, la actuación del partido peronista, a partir del año 1949, ha constituido la expresión más típica y más cruda del totalitarismo, porque se configuró como una organización política vertical.

Sr. Serú García. — No se lo admitimos, señor diputado.

—Hablan varios señores diputados a la vez.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvanse no interrumpir los señores diputados, ni interrumpir al orador.

Sr. Serú García. — Están confesando lo que van a hacer.

—Hablan varios señores diputados simultáneamente, y suena la campana.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Llaver.

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

6

CUESTION DE PRIVILEGIO

Sr. Serú García. — Pido la palabra para una cuestión de privilegio.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado Serú García.

Sr. Serú García. — Yo me imaginaba, señor presidente...

—Hablan varios señores diputados simultáneamente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvanse no interrumpir los señores diputados.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Serú García.

Sr. Serú García. — Yo me imaginaba que en torno de esta cuestión, que aparentemente era doctrinaria, se iba a provocar este debate y esta provocación por parte del sector de la Unión Cívica Radical del Pueblo.

Sr. Elena. — No sea injusto, señor diputado.

—Hablan varios señores diputados a la vez

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvanse no interrumpir los señores diputados.

Sr. Elena. — El señor diputado está haciendo imputaciones injustas.

Sr. Serú García. — Pocas veces, en lo que va del año, se ha podido hacer, como sinceramente estoy persuadido que lo hice, un planteo sobre la cuestión de carácter político con la elevación, el respeto y la consideración con que yo

formulé mis prevenciones. Lo hice convencido de que era necesaria una definición sobre este punto.

Después del penoso incidente que ha soportado la Cámara, estoy más persuadido que nunca de que esa definición era necesaria, para que se aclarara definitivamente cuáles eran las intenciones que privan en algunos hombres del sector del radicalismo del pueblo. Y quiero hacer una diferencia para no pecar de injusto.

En primer término, eximo totalmente al señor presidente de la República de esta conducta...

Sr. Balboa. — ¿Dónde está la cuestión de privilegio, señor presidente?

Sr. Serú García. — ...lo eximo totalmente porque he advertido con claridad que en ese bloque hay dos tendencias bien definidas.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Señor diputado Serú García: sírvase concretar la cuestión de privilegio.

Sr. Serú García. — La voy a concretar dentro del término que el reglamento me acuerda y en el pleno ejercicio del derecho...

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia le ruega al señor diputado se sirva ajustarse a la cuestión de privilegio que ha anunciado.

Sr. Serú García. — ...que tengo de expresar mi pensamiento con mis ideas y no con las ajenas.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Pero planteando la cuestión de privilegio.

Sr. Serú García. — La estoy planteando, señor presidente.

El motivo del claro y respetuoso planteo que he formulado, sin alusiones bastardas de ninguna naturaleza, más bien invocando el patriotismo de los señores diputados, ha provocado el ataque violento del señor diputado Llaver. El no tiene derecho a afirmar que aquí hemos venido a confesar que somos antidemocráticos o totalitarios, porque él sabe que no lo somos y sólo la pasión lo puede haber llevado a decir eso. El señor diputado Llaver sabe, o debería saberlo...

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvase no personalizar el señor diputado.

Sr. Serú García. — Estoy planteando una cuestión de privilegio contra el señor diputado Llaver y me veo en la necesidad de personalizar. No puedo hacerlo de otra manera. Es el responsable de la imputación que ha hecho a este bloque y a un sector de la ciudadanía del país, y la explicación de ello está en que en ese sector de la Unión Cívica Radical del Pueblo hay un grupo que persiste en obstruir la conciliación de los argentinos. Es el mismo grupo que ante los sucesos que hacen muy breves horas conmovieron al país, se estaba aprestando para salir a la calle con fuerzas militares coloradas dispuestos a romper el orden constitucional so pretexto de defender la democracia.

—Hablan varios señores diputados a la vez.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvase el señor diputado concretar la cuestión de privilegio.

Sr. Serú García. — No sólo estamos con la pacificación, con la defensa del orden constitucional, sino que hemos hecho uso de los derechos que nos corresponden con el respeto debido, y no hemos dado ningún motivo para ser agraviados de esa manera. Desde luego que no lo vamos a admitir, y entiendo que es necesario que la Cámara se expida sobre el agravio que hemos recibido por parte del señor diputado Llaver en ocasión del debate que estamos realizando.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar si la cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Serú García merece trato preferente.

—Resulta negativa de 79 votos; votan 101 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

7

ESTATUTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Llaver.

Sr. Ferreira. — Desarrolle sus ideas sobre el totalitarismo.

—Hablan varios señores diputados a la vez.

Sr. Elena. — Viven planteando cuestiones de prensa por la prensa del país.

Sr. Musacchio. — Si me permite, señor diputado Llaver...

Como soy miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quería saber, a los efectos de la interpretación de la ley, si las palabras del señor diputado las ha vertido como miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales o como integrante del bloque del radicalismo del pueblo.

Sr. Llaver. — He hablado a título personal y como miembro de mi bloque.

Señor presidente: podría volver la oración por la pasiva frente a las manifestaciones del señor diputado Serú García, a quien invito a leer la versión taquigráfica para ubicar con precisión el alcance de mis conceptos. Por otra parte, no creo que con reacciones histéricas, con gritos destemplados. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*) se puedan rebatir las ideas que con plena libertad estoy exponiendo en este momento. Me hubiera gustado escuchar —del mismo modo en que lo estoy haciendo yo— ideas contrapuestas que permitan demostrar que estoy equivocado cuando, en mi concepto, importan una expresión de tipo totalitario las organizaciones políticas que en lo institucional se ordenan en forma vertical, que reconocen como fin último del Estado

estar al servicio de un hombre y no la organización... al servicio de la comunidad.

Sr. Serú García. — Esa es una provocación. El peronismo está al servicio del país. Nosotros nos retiramos.

Sr. Bobillo. — Quédense. Lo que pasa es que está haciendo méritos frente a Perón.

—Hablan varios señores diputados a la vez y suena la campana.

Sr. Gutiérrez. — Pido la palabra para una moción de orden.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una moción de orden, tiene la palabra el señor diputado Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez. — Para calmar los ánimos después de este debate simulado entre dos bandos, pido que se pase a cuarto intermedio por cinco minutos.

—Hablan varios señores diputados a la vez.

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿Mantiene su moción el señor diputado Gutiérrez?

Sr. Gutiérrez. — No, señor presidente; la retiro.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Llaver.

Sr. Llaver. — Se tendría que demostrar que uno de los elementos fundamentales de la democracia, como es la vigencia efectiva de la libertad y no su proclamación formal en los textos de la ley, ha sido real y vigente durante el período a que he hecho referencia, a partir del año 1949.

Sr. Luco. — Nosotros no tenemos nada que demostrar.

Sr. Llaver. — Se tendría que demostrar que durante ese período, las libertades ciudadanas que se relacionan con la dignificación del hombre, los derechos humanos esenciales...

—Hablan varios señores diputados a la vez.

Sr. Luco. — Si el bloque radical del pueblo no desautoriza expresamente al diputado Llaver, este bloque se retira.

—Hablan varios señores diputados a la vez y suena la campana.

—Se retiran varios señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Llaver.

Sr. Llaver. — Se tendría que demostrar, señor presidente, que un estilo de vida que hace al principio ético y fundamental del contenido de la democracia, tuvo vigencia. Derechos y garantías que no sólo no rigieron para una buena parte de la ciudadanía del país, sino que en forma más especial todavía, no tuvieron vigencia para los propios integrantes de ese

partido en aquella época, que fueron las principales víctimas de la persecución y de la negación de la libertad. De todos modos, señor presidente, yo no he hecho ninguna imputación a la bancada justicialista que se sienta en este recinto y no tienen derecho sus integrantes a formular calificaciones o clasificaciones sobre la postura mental de los integrantes de nuestro bloque cuando todos, de una manera uniforme, estamos señalando con los hechos nuestra vocación fundamental para restablecer en el país la convivencia pacífica entre los argentinos suprimiendo toda legislación represiva que, de cualquier modo, suponga una persecución, y sancionando, como lo estamos haciendo ahora, un estatuto que levante y termine con las proscripciones políticas en el país.

Hemos demostrado esos hechos a través de nuestra conducta y de nuestra acción. Pero ello no importa en modo alguno...

Sr. Casas. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Llaver. — ...que tengamos que acallar nuestra voz y no señalar hechos del pasado, para que no se reproduzcan y para que sirvan de enseñanza a fin de que no se vuelva a repetir ese tipo de desviaciones en el futuro.

Concedo la interrupción al señor diputado Casas.

Sr. Bobillo. — ¡Fue, como los niños, a quejarse a la maestra!

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Casas.

Sr. Casas. — En primer lugar, voy a aclarar, frente a la expresión jocosa del señor diputado de Mendoza, que no fui a quejarme a la Presidencia. Sencillamente, fui a pedir que me anotara para hacer uso de la palabra debido a la reiterada negativa del diputado Llaver de concederme la interrupción.

Sr. Llaver. — Quería concluir mi pensamiento.

Sr. Casas. — Quiero aclarar que el señor diputado Llaver ha incurrido en verdaderos sofismas. En primer lugar, cuando se refirió a los errores del partido peronista incurrió en dos afirmaciones falsas. El señor diputado parte de la premisa general de que es absolutamente inaceptable, desde su punto de vista, la cláusula propuesta por nuestro sector. Pero en cambio, inmediatamente, llevado por su subjetivismo, por su odio, por su aversión al pasado desde 1949 a 1955, cae en el extremo de hacer ese tipo de calificaciones. Es absolutamente sofística esa afirmación cuando le constan al señor diputado los ingentes esfuerzos realizados por el peronismo, que ha soportado una tiranía tremenda, cual ha sido la de Aramburu y Rojas, frente a la cual el diputado Llaver ha sido absolutamente incapaz de levantar su voz.

Liljesthröm. — ¡Pobres víctimas!

—Hablan varios señores diputados a la vez.

Sr. Casas. — Estoy esperando que se acallen las palabras de odio de los señores diputados.

Vuelvo a insistir: el señor diputado Llaver empezó su exposición afirmando la inaceptabilidad de esta cláusula, pero para fundarla abunda en consideraciones que trasuntan odio hacia el gobierno de la República desde 1949 a 1955, y esa posición de odio del señor diputado despierta nuestra lógica desconfianza hacia la libertad política que tanto se ha declamado en este debate.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Señor diputado Casas: ¿está haciendo una interrupción o una refutación a un discurso inconcluso?

Sr. Casas. — El señor diputado Llaver me ha permitido la interrupción. Observo a la Presidencia, aunque no desco hacerle un cargo, que en un caso similar, cuando el señor diputado Almada pronunció un largo discurso...

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia se lo advirtió al señor diputado Almada.

Sr. Casas. — Después de un largo rato.

Sr. Presidente (Mor Roig). — También luego de un largo rato la Presidencia le hace la observación señor diputado.

Sr. Casas. — Seré muy breve.

Considero que si el señor diputado Llaver quiere ser coherente con su manera de pensar no puede en modo alguno referirse a los errores del pasado porque, efectivamente, esos errores los tienen todos, incluso su mismo partido.

Si me permiten, yo diría que en este momento el radicalismo del Pueblo no tiene la santidad. Creo que el error del señor diputado Llaver y de muchos señores legisladores —permítaseme la expresión— es considerarse verdaderos angelitos y pensar que todos los que no pertenecen a su partido político son verdaderos diablos. Le voy a demostrar que en la hora actual también se le podrían hacer críticas al radicalismo. Voy a contar brevisísimamente que hace bastante tiempo...

Sr. Presidente (Mor Roig). — Señor diputado: evidentemente, se está excediendo en su interrupción. El señor diputado Llaver reclama el uso de la palabra y faltan pocos minutos para que la Cámara pase a cuarto intermedio, de acuerdo con lo resuelto oportunamente.

Sr. Casas. — Terminó, señor presidente.

Si el señor diputado Llaver y el radicalismo del pueblo, en síntesis, quieren estructurar un estatuto de los partidos políticos para el futuro, en paz y libertad, deben mirar hacia el futuro y olvidar el pasado. Por ese camino, el de las afirmaciones que las interpreto hijas de un subjetivismo, el señor diputado Llaver se ha equivocado y ha lanzado una acusación injusta y arbitraria contra nuestro bloque y contra el movimiento justicialista. Yo le pido, en homenaje a la paz de la República, que se rectifique.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una interrupción, concedida por el orador, tiene la palabra el señor diputado Ghioldi.

Sr. Ghioldi. — Señor presidente: deseo que conste en el Diario de Sesiones, si es que se hubiera omitido, una interrupción dicha en alta voz por el señor diputado Luco, pues la constancia ilustrará la naturaleza de este debate.

Desde aquel lugar de la Cámara, de pie, el señor diputado Luco dijo lo siguiente: «y ahora consigan número para votar la reforma impositiva y el presupuesto».

Sr. Casas. — No tiene estado parlamentario.

Sr. Ghioldi. — Yo quiero que tenga estado parlamentario, porque las palabras dichas tienen valor extraordinario a esta altura de la noche. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Llaver.

Sr. Casas. — Pido al señor diputado Llaver que se rectifique de sus términos ofensivos.

Sr. Llaver. — En la interrupción que concedí al señor diputado Casas y a través de su exposición, ha puesto de manifiesto el error reiterado en que incurrió el bloque justicialista en la apreciación de mis manifestaciones. Yo no he dicho que el agregado que propone el señor diputado Serú García resulte inaplicable. He dicho que resulta innecesario, y me remito a la versión taquigráfica. Resulta innecesario porque en ningún caso los jueces pueden entrar a examinar los hechos del pasado para el otorgamiento de la

personería a un partido político nuevo. No puede afirmarse otra cosa, porque importaría reconocer la retroactividad de la ley, que no funciona. Pretender —por otra parte— incluir la cláusula que se proyecta, supone reconocer que este estatuto tiene destinatarios.

Nuestro bloque no admite en modo alguno que se pueda siquiera inferir que este estatuto tiene destinatarios en especial o en general. Esta es una ley general, como todas las leyes, e impersonal; y si hubiera que buscar un destinatario no sería otro como objetivo que el de resguardar fundamentalmente los principios que hacen a la esencia de la vida democrática del país, de la cual ningún sector de los que se sientan en esta Cámara puede renegar.

Para concluir, para que no quede una sola duda respecto al alcance de nuestra oposición al agregado que se propone, repito que consideramos que resulta innecesario, porque las disposiciones del estatuto que los partidos políticos deben cumplir no se refieren a hechos sino al cumplimiento de normas formales. Los hechos serán siempre para el futuro como comprobación de su adecuación a esas normas y para saber si son realmente consecuentes con sus postulaciones, en sus realizaciones prácticas.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Invito a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 10.

—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 24.